



## **Comportamiento electoral en la Región de La Araucanía, Chile: Pobreza, etnicidad y clientelismo**

Supervisor:  
Prof. Dr. Patricio Silva

Nicole Pereira Ríos  
S2388502  
Tesis de Maestría  
Estudios Latinoamericanos  
Universidad de Leiden  
Junio, 2019

# Índice

<b>Introducción</b>	<b>3</b>
<b>Capítulo 1: Etnicidad y Penetración de los Partidos Políticos en el Comportamiento electoral</b>	<b>5</b>
1.1 Etnicidad como estrategia política y social	5
1.1.1 La relación entre el Estado Latinoamericano y la estrategia de etnicidad	7
1.2 Estrategias de penetración de los partidos políticos	9
1.2.1 Penetración territorial de los partidos políticos en América Latina	11
1.2.2 Comunicación e intermediación política en América Latina	12
1.2.3 Intermediación política informal en América Latina: Clientelismo político	13
<b>Capítulo 2: Etnicidad, Clientelismo político y Comportamiento electoral en Chile</b>	<b>15</b>
2.1 Chile: Construcción de la identidad nacional única y la estrategia política de etnicidad	15
2.2 Indígenas en Chile: Entre la asimilación y el reconocimiento	16
2.3 Pueblo Mapuche en la tensión Estado-Sociedad	18
2.3.1 El caso de Wallmapuwen	20
2.4 Estrategias de penetración de los partidos políticos en Chile	22
2.4.1 Ruralidad y cultura política en Chile y La Araucanía	23
2.4.2 Caracterización del electorado mapuche	27
2.5 Clientelismo político en Chile	29
2.5.1 Clientelismo en La Araucanía	30
<b>Capítulo 3: Comportamiento político-electoral en La Araucanía</b>	<b>32</b>
3.1 La etnicidad como tensión entre el Estado y la Sociedad en La Araucanía	32
3.1.1 Mediación de los partidos políticos entre el Estado y la Sociedad en La Araucanía	34
3.1.2 Factores que inciden en el comportamiento electoral en La Araucanía	35
<b>Conclusión</b>	<b>39</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>41</b>

## Introducción

El comportamiento electoral es una de las temáticas más relevantes en el estudio de la política latinoamericana debido a que de acuerdo con el contexto los factores que influyen en él pueden ser muy variados. En el caso de la Región de La Araucanía, en Chile, es posible observar condiciones que la hacen diferenciarse del resto del país, tanto en términos históricos, como demográficos y socioeconómicos, los que colmaron de mitos y creencias sin sustento empírico a los diagnósticos de comportamiento electoral respecto a la región.

La Región de La Araucanía fue uno de últimos territorios en ser anexados a Chile, debido a esto es considerada como la región indígena por excelencia en el país y existen una serie de asuntos que aún no encuentran una solución en la relación Estado-Pueblos Indígenas, por ende, la política en La Araucanía está muy marcada por las estrategias que presentan los actores políticos en relación con la etnicidad.

Es así como el objetivo de este estudio ha sido dilucidar cuáles son los factores que inciden en el comportamiento electoral en la Región de La Araucanía, en Chile, a través de la revisión bibliográfica y el análisis de entrevistas, en torno a un modelo de relación Estado-Sociedad basado en la etnicidad como tensión y en las estrategias de penetración de los partidos políticos, tanto formales como informales, destacando entre ellas el clientelismo, como uno de los factores de incidencia, junto a la estrategia de etnicidad, la participación electoral, el conservadurismo y la pobreza. De esta forma, la relación Estado-Sociedad que se encuentra mediada por los partidos políticos, transita a través de un continuo que es influenciado por los 5 factores hallados en el estudio.

La Región de La Araucanía tiene una tendencia de voto hacia la derecha marcada desde 1988, al ser una de las dos regiones del país donde Pinochet ganó el plebiscito que definía su continuidad en el poder, con un 52,73% de los votos, tal como consignan medios nacionales como La Tercera (2018). Estos resultados y la idea de que la región es por antonomasia un territorio mapuche, alimentó por años el mito de que los mapuches votaban por la derecha, es por ello que diversos académicos se han dedicado a desentramar estas creencias alrededor del “voto mapuche”, entre ellos Toro y Jaramillo-Brun (2014), Morales y González (2011), De Cea y Fuentes (2016), Contreras y Morales (2017) y Fuentes, De Cea y Teitelboim (2019), entre otros, quienes lograron establecer que el “voto mapuche” no puede ser considerado intrínsecamente de derecha, tanto por filiación ideológica, como por cantidad de votantes, además de abrir el análisis a nuevas explicaciones posibles.

A partir de lo establecido por estos autores es que este estudio recopila a través del análisis de entrevistas y de literatura atingente, estimar cuáles son los factores que inciden en el comportamiento electoral en la Región de La Araucanía y para esto, el informe se divide en tres capítulos, el primero de ellos hace una revisión bibliográfica en torno a la estrategia de etnicidad en la tensión Estado-Sociedad y las estrategias formales e informales de penetración de los partidos políticos, revisando así ambos ejes del modelo propuesto.

El segundo capítulo aborda la contextualización de ambos ejes de análisis en Chile y en la Región de La Araucanía, por lo que también se hace una breve revisión teórica acerca de la tensión étnica y la estrategia con la que la ha administrado el Estado y la sociedad en Chile y en La Araucanía, además de una revisión de las estrategias de penetración formales e informales de los actores políticos implicados, particularmente de los partidos políticos y el clientelismo, además de una caracterización del electorado mapuche.

En el tercer capítulo se encuentra el análisis del caso, la triangulación de datos y los resultados que arrojó la investigación. Entre los resultados se destaca el hallazgo de 5 factores que inciden en el comportamiento electoral y, a la postre, político de La Araucanía, los que son: Estrategia de etnicidad, participación electoral, conservadurismo, clientelismo y pobreza. Este informe finaliza con las conclusiones del estudio, donde además se explican los sustentos teóricos de los resultados obtenidos que fueron trabajados en las secciones anteriores.

# **Capítulo 1: Etnicidad y penetración de los partidos políticos en el comportamiento electoral**

## **1.1 Etnicidad como estrategia política y social**

El concepto de “etnia” comienza a ser trabajado por las ciencias sociales desde los años 60’ a partir del trabajo de diversos antropólogos y sociólogos, junto con el estallido de nuevos conflictos de carácter “étnico” que se empezaron a producir tanto en las sociedades industrializadas, como en las tercermundistas (Giménez, 2006).

En la conformación de los grupos étnicos, estos poseen un nombre propio y sus miembros se consideran vinculados entre sí por un supuesto origen genético común, por lo tanto, en el trasfondo de la etnicidad se encuentra la familia como base de la construcción social (Giménez, 2006). No obstante, en el núcleo de la movilización indígena, de carácter étnico, es la ciudadanía, que a su vez es el núcleo de la democracia (Yashar, 2005).

Desde esta perspectiva política, el trabajo de Dahl (1963) fue uno de los más influyentes en lo relativo a la relación entre etnicidad y política, ya que según Miller (1971), fue Dahl quien concluyó que la pertenencia étnica influía en gran parte de la vida de las personas, tanto en la autoconcepción individual como en la forma en la que el medio responde al individuo, asimismo estableció que los políticos al capitalizar las identificaciones étnicas, otorgando avances sociales, económicos y políticos al grupo, obtenían como resultado una estrategia efectiva para ganar apoyo y lealtad.

En las observaciones que realizó Dahl (1963) describió tres niveles en los que la etnicidad se relaciona con el comportamiento político. En la primera etapa, el estándar socioeconómico de los grupos étnicos es bastante homogéneo, tanto en el carácter partidista como en el actitudinal. En la segunda etapa, se experimenta un avance económico y la homogeneidad tiende a romperse, sin embargo, son los lazos étnicos los que generan actitudes políticas homogéneas dentro del grupo. En la tercera etapa, donde el nivel socioeconómico de los grupos ha continuado subiendo, las actitudes políticas y lealtades están más relacionadas con el estándar de vida socioeconómico que con los lazos étnicos, ya que el individuo tiende a pensar más en cómo su posición política se condice con su nivel socioeconómico personal que con su identidad étnica.

En este sentido, el Dahl (1963) considera que el desafío de un candidato étnico radica con mayor probabilidad en las divisiones que generan dentro del grupo las problemáticas socioeconómicas, que en forjar un sentimiento de orgullo en su herencia étnica. En conclusión, Dahl (1963) señala que la identificación étnica tiene mayor impacto sobre el comportamiento electoral en grupos socioeconómicos y étnicos homogéneos, mientras que a medida que el grupo se vuelve heterogéneo a través de la movilidad social, la influencia étnica en el comportamiento político disminuye.

A este respecto, Wolfinger (1965) sostiene que una clase socioeconómica homogénea no es tan relevante como la movilidad social en la importancia de la etnicidad como factor político. De esta forma, las condiciones previas para el voto étnico van más allá de la intensidad de la identificación étnica -donde concuerda con Dahl (1963) acerca de la relevancia de la homogeneidad étnica y social- sino que apunta a la relevancia que tenga la etnicidad para la elección en específico.

Mörner (2019), considera que en los conflictos que afectan principalmente al Tercer Mundo, aunque también a Europa y Norteamérica, la etnicidad tiene mayor relevancia que las temáticas materiales. Asimismo, William (1989 en Urban y Sherzer, 1991) establece el concepto de etnicidad como intrínsecamente político, al describirlo como subgrupos dentro de la jurisprudencia de un Estado, donde dichos miembros usan al subgrupo para promover sus propios intereses colectivos. Esta perspectiva también se encuentra presente en el trabajo desarrollado por Wolfinger (1965), debido a que considera que para los miembros de un grupo étnico es altamente importante la presencia de candidatos pertenecientes a estos grupos en las elecciones, lo que grafica la relevancia de la pertenencia étnica en el comportamiento electoral de los votantes.

En este sentido, la etnicidad no es un fenómeno pasajero, siendo la “modernización” un potente catalizador para el resurgimiento de lo étnico, ya sea con el objetivo de ofrecerle resistencia o con el de crear un nuevo espacio para grupos específicos (Wolfinger, 1965). La visión de carácter “primordialista” de la etnicidad se basa, generalmente, en construcciones subjetivas y actuales (Baud *et al.*, 1996). La estrategia de la etnicidad “no se puede reducir a una retórica simbólica” (Baud *et al.*, 1996: 183). En este sentido, es innegable la tensión intrínseca al concepto de etnicidad como una suma de características socioculturales, de carácter subjetivo y como opción de estrategia política, de dimensión objetiva (Baud *et al.*, 1996).

Respecto a la tensión anterior, Mörner (2019) reflexiona en torno al concepto de honor colectiva (*Massenehre*) propuesto por Weber, aludiendo a que cualquier miembro de un grupo étnico participa de este sentimiento, independiente de su posición social, lo que entra en conflicto con lo postulado por Dahl (1963) acerca de los niveles en los que la etnicidad influye en el comportamiento electoral y político de los individuos.

Asimismo, Baud, *et al.*, (1996) advierten que las ideas de nación (en tanto modelo) y nacionalismo (en tanto doctrina), son “opciones estratégicas”, cuya formación está relacionada con la etnicidad, donde el Estado centralizador concientiza a las minorías étnicas de su propia identidad, “a veces estas minorías intentaban servirse del nuevo aparato estatal a fin de defender sus propios intereses étnicos. En otros casos la etnicidad invocada por el Estado funcionaba como una fuente de resistencia” (p.74). Además, según los autores, son las diferencias étnicas las que generan que grandes segmentos de la población no depositen confianza, ni se identifiquen con sus propios Estados.

Es así como los autores destacan la relevancia que tiene para la formación, construcción y desarrollo de los Estados modernos, específicamente en contextos como el latinoamericano, la existencia de grupos étnicos que evoquen una idea de ancestralidad común, ciudadanía e

identidad cultural integradora de todos los miembros de la nación, por lo tanto, la etnicidad, como unidad etnocultural del pueblo, es también una estrategia política del Estado (Baud, *et al.*, 1996).

Por otra parte, Mörner (2019) vuelve sobre el concepto de Weber de cierre social, señalándolo como una estrategia que busca excluir a ciertas partes de la población, con el propósito de maximizar los beneficios del grupo que impone el cierre. Asimismo, Mörner (2019) incluye los conceptos de Parkin para complementar los postulados de Weber, sumando el concepto de cierre de usurpación, donde los excluidos tienen como meta la obtención de los beneficios negados y el concepto de cierre dual, en el que un mismo grupo busca hacer un cierre de usurpación hacia el grupo que los excluye y a la vez promueve la exclusión de otro grupo, siendo las clases obreras blancas de Sudáfrica un ejemplo de este tipo de cierre. En este sentido, el autor establece según los términos de Parkin, que la falta de solidaridad social no es sólo guiada por prejuicios raciales, sino que también está guiada por la racionalidad de los individuos, lo que podría tener algún nivel explicativo del comportamiento político y electoral de los distintos grupos sociales.

De este modo, el surgimiento y resurgimiento de grupos étnicos que buscan redefinir el concepto de ciudadanía toma cada vez mayor urgencia, articulando dos estrategias principales, la primera basada en ideas de autodeterminación conforma la estrategia más extrema y excluyente de ciudadanía, al redefinir sus parámetros y restringiendo la pertenencia a un grupo étnico exclusivo (Yashar, 2005). Asimismo, se ha propuesto que estas luchas de carácter restrictivo de la ciudadanía a través de preceptos etnonacionales comúnmente tienen resultados violentos (Yashar, 2005).

Por otra parte, la segunda estrategia de redefinición del concepto de ciudadanía está centrada en el contenido del mismo, donde los grupos étnicos se movilizan con el objetivo de mantener sus derechos como ciudadanos a la vez que acomodan sus demandas de base comunitaria hacia la autonomía local (Yashar, 2005). Esta estrategia está contenida dentro de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y se condice con el carácter dialogante de la democracia, apuntando hacia la participación en la política institucionalizada.

### 1.1.1 La relación entre el Estado Latinoamericano y la estrategia de la etnicidad

Latinoamérica ha sido descrita como una región donde las identidades étnicas no tienen mayor relevancia, debido a que los clivajes étnicos son débiles en comparación con otras regiones del mundo, los conflictos étnicos violentos son poco comunes, ya que el mestizaje y la asimilación dieron paso a una nueva concepción racial (Yashar, 2005). En este sentido, los esfuerzos por asignar o redefinir la ciudadanía han sido catalogados como causas de democratización más que de políticas étnicas (Yashar, 2005).

De esta forma, existen dos patrones principales de relaciones interétnicas, uno de ellos se encuentran en los países meso andinos del Pacífico, donde en ciertos sectores geográficos los indígenas conforman la mayoría o parte sustancial de la población, con un destacado dualismo étnico y el otro que se encuentra en las áreas de tierras bajas y tropicales, en el que persiste un

marcado pluralismo étnico, en estos casos el mestizaje ha sido históricamente reconocido, a pesar de que existe una escala social de tipo racial, que hace más difícil la movilidad social de los grupos étnicos en esta área respecto de la meso andina (Mörner, 2019).

Observando la historia, entrado el Siglo XX los jóvenes Estados Latinoamericanos debieron enfrentar diversos movimientos étnicos, donde fueron varios los casos en los que las poblaciones indígenas buscaron superar las diferencias locales y organizarse entre ellas, al punto de que muchas revoluciones de carácter nacional se articularon en torno a un tinte étnico que les dotara de sentido, sumado al aspecto de clase (Baud *et al.*, 1996). A modo de ejemplo los autores mencionan los casos de México, Cuba y Nicaragua (Baud *et al.*, 1996).

En cuanto a los modelos de desarrollo que se implementaron en América Latina consideraban a la etnicidad en segundo plano y a los ciudadanos indígenas como una desventaja para la modernización (Baud *et al.*, 1996). No obstante, “los políticos se dieron cuenta de que sus países eran multiétnicos y de que las autoridades tenían el deber de responder a esta situación” (p. 106), entonces incorporaron en mayor o menor medida algunas de las ideas indigenistas a la noción de Estado-Nación (Baud *et al.*, 1996).

Sin embargo, Mörner (2019) señala que en países como México u otros con pueblos indígenas concentrados en un área geográfica específica, es posible encontrar dinámicas de colonialismo interno, replicando un proceso de explotación y represión similar al que sufrieron las antiguas colonias de los imperios europeos.

Es así como, desde fines del siglo XX, se ha articulado una estrategia de etnicidad “desde abajo”, con el surgimiento de movimientos indígenas organizados a través de plataformas nacionales -como es el caso de Ecuador con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador- que después de años de debate alrededor del indigenismo, han considerado relevante a la etnicidad como factor de las movilizaciones sociales y políticas (Baud *et al.*, 1996), que por tanto afecta considerablemente el desarrollo de la política institucionalizada y, por ende, el comportamiento político y electoral de los ciudadanos. En el seno del surgimiento de este tipo de movimientos se encuentran tres factores: el cambio de los regímenes de ciudadanía que desafían la autonomía local, las redes transcomunitarias y el espacio para la política de asociación (Yashar, 2005). Además, Yashar (2005) ha establecido que donde la autonomía fue posible, los clivajes étnicos fueron más débiles, mientras que donde la autonomía fue constantemente desafiada, los clivajes étnicos fueron más relevantes. Asimismo, la tesis de la autora reflexiona en torno a los regímenes de ciudadanía en Latinoamérica, señalando que, debido a la erosión de los regímenes de ciudadanía previos, surgió en toda la región un cambio inconsciente en la autonomía local, por ende, la politización de los pueblos indígenas emergió de formas nuevas.

Respecto a la politización y surgimiento de movimientos indígenas organizados, Serbín (1980) resalta la existencia de factores endógenos y exógenos que los impulsaron, entre ellos destaca principalmente la intervención estatal y la aparición de una intelectualidad étnica que articula ideologías étnicas y etnopolíticas, que ponen el foco en la en la visión de los oprimidos. Mientras que Engelman (2017), destaca la dimensión de “participación” presente en los discursos indígenas contemporáneos de los movimientos indígenas argentinos, superando los

conceptos de “asimilación” e incluso el de “autonomía”, apuntando no excluirse de las funciones de la estructura estatal.

Los Estados Latinoamericanos con gran diversidad etnocultural debieron, en general, adoptar y adaptar una de las dos estrategias posibles de formación de identidad nacional, una de origen “interno” y otra de origen “externo”, la de origen interno tiene un enfoque explícito en la heterogeneidad étnica como un valor, mientras que la segunda pone el énfasis en un enemigo étnico extranjero que genere unidad interna y apele al nacionalismo (Baud *et al.*, 1996).

Por otra parte, desde los actores sociales también se generan estrategias tendientes a acceder a la estructura estatal e incidir sobre lo público, ya sea influenciando en su quehacer o asegurando su acción, además de entrar en el espacio público de comunicación en el que se sustenta la opinión pública (Delamaza, 2012)

Ahora bien, la etnicidad es una de las tensiones que compone la relación simbiótica entre el Estado y la sociedad, y a través de ella, estos actores intentan imponer su estrategia. No obstante, la teoría clásica de la democracia liberal propone a los partidos políticos como intermediarios en la relación Estado-Sociedad, debido a que los partidos son el medio institucionalizado, mediante un sistema de partidos, a través del cual la sociedad se organiza y ocupa el poder estatal (Sartori, 1976). En este sentido, resulta relevante observar cómo se plantean los partidos y sistemas de partidos para ejercer esta labor de intermediación.

## **1.2 Estrategias de penetración de los partidos políticos**

Dentro del análisis del comportamiento electoral, resulta relevante el nivel de penetración territorial de los partidos políticos en las sociedades permite observar los distintos niveles en los que están compitiendo los partidos que conforman el sistema y que afectan en diferentes aspectos, tales como la calidad de la democracia, la representación, las políticas económicas y sociales y la estabilidad de los gobiernos y los sistemas políticos (Chhibber y Kollman, 2004). En este sentido, los diferentes niveles de nacionalización de los partidos tienen consecuencias en el rendimiento del sistema político en su conjunto (Jones y Mainwaring, 2003). Schattschneider (1960) señala que las orientaciones de los electores y, por ende, la debilidad o fortaleza de los lazos que estos generan con los partidos es una de las consecuencias del grado de penetración territorial que estos tengan.

Por otra parte, Stokes (1967) pone el énfasis en las consecuencias que la penetración territorial de los partidos tiene sobre las relaciones ejecutivo-legislativo. Es así como, un sistema de partidos con baja penetración a nivel nacional podría aumentar la probabilidad de que surjan conflictos de carácter étnico o religioso (Batlle y Puyana, 2011). De este modo, el nivel de penetración territorial de los partidos políticos no solo se relaciona con el comportamiento electoral, sino que además con el grado de permeabilidad del sistema de partidos.

El grado de permeabilidad de un sistema de partidos políticos dice relación con la posibilidad de que nuevas fuerzas políticas puedan entrar a competir, rompiendo el *statu quo* partidario, lo que se encuentra estrechamente relacionado con la existencia de un sistema electoral inclusivo y con un sistema de partidos fraccionado e inestable (Martí I Puig, 2008).

Lo anterior destaca la utilidad de los procesos de nacionalización de la política para la estructuración de la política partidista y para el desarrollo de una ciudadanía política democrática, que transite desde una política segmentada y clientelista, dominada por personalismos locales a una representación nacional (Caramani, 2004). Por otra parte, Durston (2012) entra en controversia con Caramani (2004) al señalar que un sistema de administración política más descentralizado sería menos propenso a albergar prácticas clientelistas, ya que las cuotas de poder estarían menos concentradas. No obstante, Caramani (2004) en concordancia con lo establecido por Clagget *et al.*, (1984) señala que la nacionalización del sistema de partidos se basa tanto en la homogeneidad territorial de aspectos electorales y de partidos, como en el predominio e influencia de las fuerzas políticas nacionales sobre las regionales, generando convergencia de apoyo partidista en diferentes niveles y uniformidad en la respuesta de las unidades geográficas al acontecer político.

Debido a que competir en elecciones es una necesidad para los partidos políticos, hacerlo en distintos niveles de territorialidad aporta el desafío de generar estrategias políticas que los hagan competitivos en cada uno de esos niveles (Scherlis, 2016). Asimismo, el autor coincide con Batlle y Puyana (2011) al indicar que la tendencia a la territorialización de la política -es decir, el giro hacia un enfoque local- genera que a niveles locales los partidos políticos funcionen de forma disociada respecto al relato nacional de los mismos, adquiriendo mayor autonomía al nivel subnacional, pero fragmentando la política nacional en términos geográficos.

Con base en lo propuesto por Thorlaksson (2009), Scherlis (2016) utiliza una clasificación de los partidos según su nivel de integración territorial como un continuo entre partidos verticalmente integrados, partidos verticalmente divididos y partidos truncados:

- Partidos verticalmente integrados: Partidos cohesionados en sus diferentes niveles y con fuerte dirección nacional.
- Partidos verticalmente divididos: Partidos con amplia autonomía a nivel subnacional. Las ramas regionales de los partidos generan sus propias estrategias, recursos y alianzas. Suelen mostrar estrategias incoherentes a escala multinivel.
- Partidos truncados: Partidos que pertenecen a sólo un nivel territorial y que no forman parte de ninguna organización de alcance nacional.

La proliferación de un tipo de partido más que de otro encuentra sus causas no sólo en los procesos de descentralización política y administrativa, sino que también en las variables de sistema electoral y de normas que rigen al sistema de partidos, ya que un sistema que permita la formación de un partido en un solo distrito y maneje fechas diferenciadas para las elecciones nacionales y locales, podría tender al surgimiento de mayor cantidad de partidos truncados que

un sistema que exija formación de partidos en todos los distritos y que realice elecciones nacionales y locales en la misma fecha (Scherlis, 2016).

En este sentido, Scherlis (2016) establece 4 aspectos como relevantes dentro de la regulación electoral y partidaria en relación con la territorialización de los partidos, ellos son: i) la naturaleza jurídica de las organizaciones que operan en diferentes niveles de competencia, ii) *timing* electoral, iii) la conformación de alianzas electorales y iv) el financiamiento. Estos aspectos se encuentran en constante interacción y en América Latina es posible encontrar casos con alta variabilidad (Scherlis, 2016).

### 1.2.1 Penetración territorial de los partidos en América Latina

El nivel de penetración territorial de los partidos en Latinoamérica, en cuanto a la nacionalización de los partidos, cuenta con una particularidad: su bajo nivel de nacionalización (Jones y Mainwaring, 2003) y la alta variabilidad de los sistemas de partidos que componen las democracias de la región (Scherlis, 2016). Junto a ello se encuentran las marcadas diferencias que hay en el desempeño de los sistemas políticos de estos países, las que hacen latente la relación entre la nacionalización del sistema de partidos y la gobernabilidad, la estabilidad del sistema y el rendimiento de estas democracias (Batlle y Puyana, 2011). Siguiendo lo establecido por los autores, un sistema de partidos de nivel subnacional deja altamente condicionado el funcionamiento del sistema de partidos a nivel nacional.

En lo relativo al comportamiento electoral, el estudio realizado por Batlle y Puyana (2011) les permitió concluir que una alta votación no está directamente relacionada con un alto nivel de nacionalización del partido y que marcos legales que tiendan a una administración pública más descentralizada, generan mayor competencia entre los partidos a nivel territorial y cambian el enfoque de la política hacia lo local.

Con el énfasis puesto en las variables de regulación sistémicas Scherlis (2016), concluye que Argentina y México son los países que tienden a menores posibilidades de generar integración vertical, lo que se puede entender por el carácter federativo de sus constituciones. No obstante, Brasil es el país que cuenta con la normativa que genera mayor tendencia a la integración vertical de los partidos en toda la región. Asimismo, el sistema uruguayo también se inclina hacia la integración vertical, aunque en el manejo del financiamiento tiene características que tienden a desincentivarla. Los casos de Costa Rica, Perú y Colombia fueron catalogados como híbridos.

Sin embargo, Scherlis (2016) indica que regulaciones similares tienen distintos efectos en cada país. En el caso de la integración vertical de los partidos destacan las disparidades de los casos de México y Perú, donde ambos países tienen regulaciones que contemplan la existencia de movimientos políticos y partidos de carácter truncado, en Perú esto generó un gran nivel de desintegración territorial en el que la política subnacional está dominada por este tipo de partidos, mientras que en México la política subnacional sigue estando dominada por partidos de territorialización nacional. Parte esencial del anclaje territorial de los partidos se realiza a

través de su labor como intermediarios entre el Estado y la sociedad, lo que a nivel práctico se materializa a través de las campañas electorales que realizan (Scherlis, 2016).

### 1.2.2 Comunicación e intermediación política en América Latina

Así como indica Sartori (1976) la comunicación es una característica universal de todos los sistemas políticos. En este sentido, el autor establece la existencia de tres niveles de abstracción, la comunicación política (más general), la canalización (perteneciente a los partidos políticos) y la expresión (como nivel de abstracción específica y adjudicada a los sistemas de partidos).

Además, dentro de la actividad-comunicación y la actividad-política que describe Canel (1999), destaca lo señalado por Schudson (1997) que extiende la “dimensión comunicativa [a] cualquiera de los actos de las estructuras políticas, así como a la acción de emisión del mensaje por parte de todos los posibles protagonistas” (Canel, 1999: 22).

En este sentido, las campañas electorales como fenómeno de comunicación política han sido consideradas como uno de los núcleos destacados dentro de los procesos políticos de las democracias contemporáneas (Farrell y Schmitt-Beck, 2003; Trent y Friedenberg, 2008) y en las últimas décadas han incrementado su relevancia como forma de intermediación política, en parte reflejando el aumento de la volatilidad en los procesos electorales y en parte reflejando el cambio en las temáticas, con énfasis en la existencia de modos de participación política alternativos (Farrell y Schmitt-Beck, 2003), demostrando que el desarrollo de estas afecta al comportamiento electoral.

En el caso de Latinoamérica, Luna (2014) señala que la relación entre los partidos políticos y la ciudadanía está fuertemente mediada por la desigualdad estructural existente en los países de la región, ya que en estos casos los partidos políticos optan por una serie de estrategias de enlace socioeconómica y territorialmente segmentadas, en las que con un segmento recurren a estrategias no programáticas y particularistas (como el clientelismo), con otros segmentos recurren a la canalización de programas e ideas, superando la idea de que ambos tipos de vínculo no pueden coexistir en la estrategia de un partido. Además, el autor sostiene que los partidos necesitan estrategias segmentadas para evitar ser electoralmente intrascendentes.

Asimismo, Luna (2014) establece que, si bien todos los partidos segmentan, el crecimiento electoral pasa por la capacidad de armonización que tengan los partidos, es decir, la capacidad que estos tienen para distribuir los recursos materiales y simbólicos con los que cuentan para encuadrar a los activistas, por lo tanto, requiere de una capacidad organizacional con la que no todos los partidos cuentan. Asimismo, señala que esta segmentación no se sirve de la desigualdad estructural, sino que también la refuerza.

Según lo señalado por Szwarcberg (2013) al observar los municipios argentinos, los candidatos deben preferir utilizar estrategias clientelares con el objetivo de movilizar votantes. Bajo este criterio, divide a los candidatos en dos categorías: i) “pragmáticos”, siendo estos aquellos que además de tener las capacidades, eligen establecer un vínculo no programático

con los electores; e ii) “idealistas”, siendo estos los que, a pesar de poder entablar una relación no programática con los electores, optan por no hacerlo.

Siendo la movilización de los votantes parte esencial de las estrategias de los partidos en cualquier parte del mundo, incluso en las estrategias más comunes, como los puerta a puerta o campañas telefónicas, los candidatos confían en el conocimiento de intermediarios locales que conozcan las tendencias políticas de votantes individuales, que serían imposibles de determinar de otra manera (Larreguy, Marshall y Querubín, 2016). Estos intermediarios no requieren de un pago cuando comulgan con las ideas del partido, no obstante, los partidos pueden contratar intermediarios pagados, aunque no sean sus simpatizantes, como el caso de México (Larreguy, Marshall y Querubín, 2016).

Por otra parte, Calvo y Murillo (2012) ponen el énfasis en el electorado y en su capacidad para distinguir la probabilidad de la retribución que esperan, la que está relacionada con la proximidad que exista entre los electores y los activistas de los partidos y con el auto posicionamiento ideológico. En Argentina, por ejemplo, el electorado espera que la retribución se materialice a través de los activistas y redes de partidos, mientras que en Chile se generan mayores expectativas de retribución en la medida en que los partidos más ideológicamente afines con el elector alcancen el poder (Calvo y Murillo, 2012).

### 1.2.3 Intermediación política informal en América Latina: Clientelismo político

Si bien los esfuerzos por definir el clientelismo han sido muchos, Hicken (2011) establece una serie de elementos que delimitan el concepto, siendo estos la contingencia de la reciprocidad, la jerarquía dentro de la relación recíproca, el carácter repetitivo de la relación y reflexiona acerca del carácter voluntario de la misma, debido a la jerarquía existente dentro de ella. Por otra parte, Hicken (2011) destaca que el apoyo político como criterio para recibir el beneficio específico es fundamentalmente lo que diferencia al clientelismo político de otras estrategias de intercambio de beneficios en las que el criterio principal es la pertenencia a un segmento objetivo específico, siendo esta una característica que también señala Stokes (2011).

Hicken (2011) destaca la capacidad de adaptación del clientelismo a diversos contextos económicos, políticos y culturales y establece que, a diferencia de lo que se postulaba con anterioridad, el clientelismo político a menudo se adapta y perdura ante el desarrollo económico. Además, Hicken (2011) señala que el clientelismo político es observado tanto como un destructor de la democracia y un indicador de la suboptimización de las políticas públicas, y también como una merma en la capacidad de los ciudadanos para responsabilizar a los funcionarios electos tanto a nivel individual como colectivo, además de inducirlos a mantener a dictadores y corruptos en el poder ya sea por temor o por la concreción de intereses personales, por ende mina la confianza en las instituciones públicas y genera altos niveles de corrupción.

Dentro del debate del clientelismo, Stokes (2011) señala que la pobreza y la desigualdad social son tanto una causa como una consecuencia de este y establece que el patronazgo y la compra de votos son subtipos del clientelismo, la compra de votos se basaría en concretar la

obtención del voto de una persona en específico y el patronazgo en beneficiar a través de bienes públicos, principalmente a través de los empleos públicos, a una persona en específico, es así como, el clientelismo procura maximizar la cantidad de personas que participan de la relación. Durston *et al.*, (2005) agregar que el clientelismo político es parte del capital social con el que cuenta un individuo en el centro de una red con forma de telaraña, que se genera en las redes de relaciones personales en un contexto político.

En el caso de América Latina, Hicken (2011) describe a la competitividad de los partidos como un arma de doble filo para el sistema político, ya que debido a los altos niveles de competitividad los partidos políticos de base obrera se han convertido en partidos clientelares.

Por otra parte, la formación y desarrollo de los movimientos indígenas en América Latina y la participación de estos dentro de la esfera de la función pública, ha articulado la etnicidad dentro de la vida ciudadana (Engelman, 2017). En el caso de Almirante Brown en Argentina, los procesos de visibilización de estos grupos fueron acompañados por “la apropiación de políticas y programas estatales bajo relaciones clientelares y de asistencia” (Engelman, 2017: 51).

## **Capítulo 2: Etnicidad, clientelismo político y comportamiento electoral en Chile**

### **2.1 Chile: Construcción de la identidad nacional única y la estrategia política de la etnicidad**

Dentro de los fenómenos políticos, la identidad es un factor que ha estado presente como tema en los debates académicos desde los años 80', junto con la incursión de nuevos movimientos sociales, estos nuevos debates reemplazaron en todo el mundo a la "política de clases", por la "política de identidades", influyendo tanto en las ideas de nación como en los nacionalismos (Larraín, 2001). Según Larraín (2001), una de las constantes del pensamiento latinoamericano ha sido el tema de la identidad nacional, tanto por el origen mestizo como por la sensación de crisis permanente que vive la región.

.Mientras que este debate surgía en todo el mundo, Chile debió enfrentarlo en medio de la represión de la dictadura, esto influye en la interpretación de la identidad que se dio en esta época, donde se reinventan dos de las versiones más relevantes de la identidad chilena: la religioso-católica y la militar-racial, otros tipos de identidades que el autor atribuye a los chilenos son la psicosocial, la hispanista, la de cultura popular y la empresarial o neoliberal (Larraín, 2001).

Dentro de los factores que influyen en la construcción de la identidad nacional, Larraín (2010) distingue cuatro hitos históricos en el tiempo: la independencia, el fin del Estado oligárquico alrededor de 1910, el golpe de Estado de 1973 y el retorno a la democracia en 1990. No obstante, también destaca ciertos rasgos del Chile colonial que forjaron la identidad nacional, como el centralismo político, el monopolio religioso católico, la orientación económica hacía la exportación de materias primas y el poder político autoritario, desde aquí se engendran los primeros rasgos de larga duración en Chile: el centralismo y el autoritarismo.

Por ende, desde la fundación de Chile como país independiente se ha buscado generar un relato de épica histórica ancestral, con alusiones románticas a lo indígena, en sus inicios rescatando el relato de conquista de La Araucana de Alonso de Ercilla y luego con la representación del roto, como un estereotipo racial mezcla de mapuche y godo (Isla, 2012).

Sin embargo, para la conmemoración del centenario de Chile, en 1910, la sociedad no tenía consciencia de un maltrato histórico a los mapuches, en gran parte debido a que la anexión definitiva del territorio se había logrado hace poco tiempo, mientras que en los hitos siguientes, cuando se comenzó a superar el temor y la censura que había impuesto la dictadura, surgió el movimiento mapuche de carácter autonomista planteando un nuevo desafío a la unificación de la identidad chilena y exigiendo reconocimiento como pueblo originario despojado que requiere reparación (Larraín, 2010).

En las celebraciones del bicentenario de Chile, el movimiento mapuche ya se encontraba con facciones radicalizadas y los chilenos comenzaron a constatar la existencia de un problema de larga data, que afecta la construcción de la identidad nacional (Larraín, 2010). En este sentido, el autor señala que, a pesar de un creciente sentido de construir una nación distinta de la chilena, muchos descendientes mapuches directos se han asimilado completamente a la nación chilena.

En la preparación de las celebraciones del bicentenario de Chile, desde el 2003 comenzó a funcionar la denominada “Comisión Bicentenario”, que según Álvarez-Rubio (2005), se puede reconocer como un esfuerzo sólido en pro de impulsar la comprensión de la heterogeneidad cultural del país, el que además de rescatar distintas expresiones culturales dentro de todo Chile, también buscó incluir las percepciones de los chilenos que se encontraban en el extranjero.

## **2.2 Indígenas en Chile: Entre la asimilación y el reconocimiento**

Chile posee un alto grado de homogeneidad étnica, por lo que históricamente la etnicidad no ha sido un factor relevante en la cotidianidad, la zona de la Región de La Araucanía, significativamente denominada *La Frontera*, que fue tardíamente anexada al Estado Central a través de la fuerza militar, es el territorio que se reconoce como intrínsecamente indígena en el imaginario identitario chileno. Es esta historia de resistencia la que provoca que en Chile lo indígena tenga una noción positiva, considerándose como símbolo de la valentía, indoblegabilidad y orgullo del pueblo chileno, que ha denominado a los mapuches como “pueblo indómito” (Baud *et al.*, 1996). Sumado a esto, el peso de las instituciones nacionales ayudó a una rápida asimilación y propagación de la identidad nacional sin un componente étnico importante (Baud *et al.*, 1996).

En este sentido, Bengoa (1985) señaló que ya en la época de los años 20’ la población mapuche se había incorporado a las clases bajas de la sociedad chilena. Por otra parte, Foerster y Montecinos (1989) destacaron el racismo en la sociedad chilena como el principal obstáculo para la construcción de una “sociedad de destino común” que respete las diferencias entre los distintos grupos étnicos. Luego, Foerster (1999) continuó desarrollando su propuesta señalando que, durante la primera década desde el retorno a la democracia, el movimiento mapuche transitó hacia el etnonacionalismo, entendido como el nacionalismo de las minorías étnicas frente a una dominación a nivel estatal, es decir, un nacionalismo que distingue entre el nacionalismo del Estado y el de las etnias. Esto lo constató el autor en el discurso que levantaron las organizaciones mapuches no cooptadas y en oposición a la postura de los gobiernos de la concertación y a la intelectualidad mapuche de la época, según destaca Marimán (2012).

Sin embargo, Saavedra (2002) entra en desacuerdo con lo establecido por Foerster (1999) e indica que la población mapuche continúa integrándose a la sociedad estado-nacional de Chile, a través de diversas identidades entre las que destaca la identidad chilena, la de clase, la de asalariado y la indígena de mapuche. En este sentido, Saavedra (2002) señala que en la

actualidad la demanda mapuche de autonomía no es una expresión de etnonacionalismo (como había sostenido Foerster) sino que es una demanda acorde con el sistema político y económico actual, en el que campesinos pobres, indígenas y marginados del poder necesitan aliarse con otros miembros de la sociedad que se encuentran en condiciones similares, con el objetivo de generar cambios en un sistema que los oprime económicamente y que presiona a todos por igual.

En el último tiempo, en Chile se están haciendo esfuerzos culturales con el propósito de romper con la idea de homogeneidad identitaria, que ha caracterizado al discurso oficial acerca de la identidad chilena, dentro de estos esfuerzos, Álvarez-Rubio (2005) destaca el literario, puesto que es el más altamente relacionado con la heterogeneidad cultural.

Álvarez-Rubio (2005) reconoce en la denominada “novela del golpe” un punto de inflexión frente a la idea de identidad homogénea en el país. Además, la autora destaca que en esta ola narrativa los autores buscaron deconstruir el falso paradigma de la identidad, dominada por lo eurocéntrico, y proponen la creación de categorías más incluyentes, que aborden a cabalidad la concepción de la identidad chilena y latinoamericana.

Desde lo visual, Álvarez-Rubio (2005) señala que existe una repetición del gesto oficial hacia el reconocimiento del mestizaje, lo que es interpretado como un discurso que esquiva la resolución de injusticias y que de paso cooptan el verdadero sentido de la heterogeneidad. En este sentido, Larraín (2001) ya hacía hincapié en la inexistencia de una identidad chilena determinada por sí misma, sino que la existencia de esta se basa en la relación dinámica de los diferentes discursos identitarios que las personas ponen en práctica a través del autorreconocimiento efectivo.

A nivel político y discursivo, el análisis que realiza Muñoz-Navarro (2008) señala que la derecha chilena levanta un discurso que tiende a disminuir el énfasis hacia lo étnico y que se construye desde una idea tradicional de Estado-Nación, lo que podría explicar el comportamiento electoral mapuche respecto a la derecha como posición política, señalado por Toro y Jaramillo-Brun (2014), debido a que no se encuentran reconocidos como otro en el ejercicio democrático. No obstante, Vergara y Foerster (2002) consideran indiscutible que durante el siglo XX el voto mapuche rural era preferentemente hacia la derecha, puesto que este sector político se autodefine como defensor del Estado de Derecho y el orden político.

Por otra parte, los gobiernos de la concertación mostraron un discurso de mayor inclusión, a través de estrategias mayormente vinculadas a la asimilación y chilenización que al reconocimiento respetuoso del otro (Donoso, 2013). Sin embargo, Muñoz-Navarro (2008), destaca que en lo práctico la distancia con este discurso progresista fue evidente, a través de la criminalización y la persecución de la protesta mapuche y sus demandas etno-políticas.

Mientras que el discurso conservador busca abordar la temática mapuche como una problemática derivada de la pobreza rural y sin una arista de identidad indígena, los gobiernos de la concertación buscaron ampliar la perspectiva del problema sumando el carácter étnico del mismo, a través de la implementación de leyes indígenas e instituciones abocadas al tema (Muñoz-Navarro, 2008). No obstante, estas no han logrado subsanar el problema de fondo y han generado una dependencia de tipo clientelista entre el Estado y las organizaciones mapuche

(Vergara y Foerster, 2002). Según los autores, esto devela una debilidad institucional en el tratamiento de las problemáticas de los pueblos originarios en general, es así como la problemática mapuche ha sido entendida como un problema de minoría étnica y aún no hay reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas en Chile (Vergara y Foerster, 2002)

En lo que respecta a la institucionalidad chilena, la ratificación del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido uno de los acuerdos más importantes que ha suscrito el país, no obstante, según las estadísticas oficiales, en Chile aún no se han logrado corregir las diferencias socioeconómicas existentes entre la población indígena y el resto de la población nacional, perpetuando la exclusión socioeconómica que afecta históricamente a los pueblos indígenas en Chile (Aylwin, Meza-Lopehandia y Yáñez, 2013).

De acuerdo con lo que sostiene Álvarez-Rubio (2005) es trascendental para el contexto latinoamericano adoptar el concepto de heterogeneidad identitaria, que postula la necesidad de aceptar a otro diferente y contradictorio.

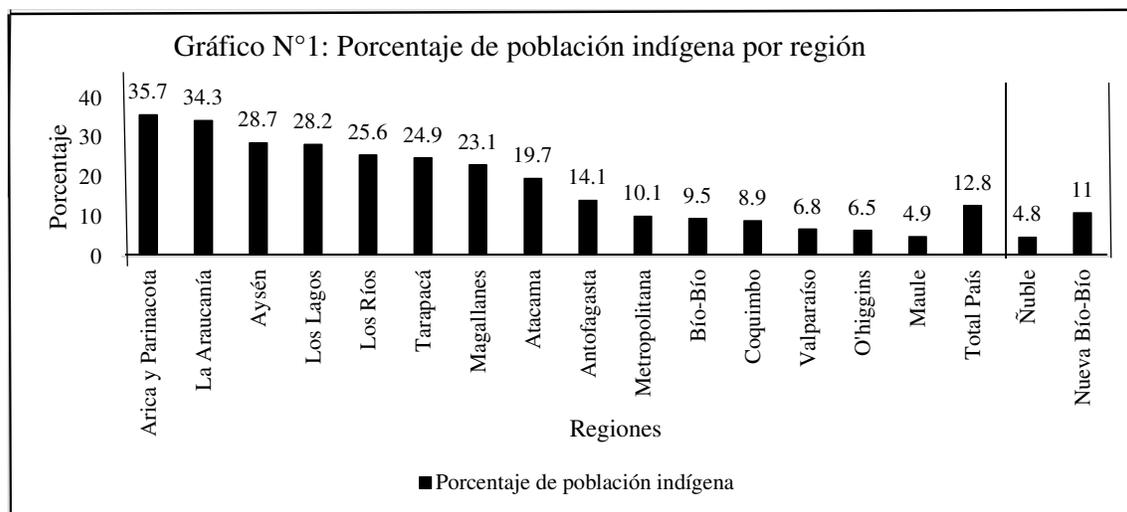
## **2.3 Pueblo Mapuche en la tensión Estado-Sociedad**

En la actualidad los mapuches son 1.745.147 personas, representando un 9,9% de la población total de Chile, que reside principalmente en la Región Metropolitana, la Región de La Araucanía, la Región del Bío-Bío y la Región de Los Ríos (INE, 2017).

La Región de La Araucanía en Chile (ver mapa N°2), donde actualmente un 34,3% de la población se declara indígena (INE, 2017), es la segunda región del país con mayor cantidad de población indígena, sólo superada por la Región de Arica y Parinacota (ver gráfico N°1). No obstante, al analizar sólo a la población mapuche la Región de La Araucanía se impone a nivel nacional en términos porcentuales. Históricamente, esta región se ha caracterizado por un comportamiento electoral con tendencia de voto hacia coaliciones de derecha y centro derecha y entre las teorías que buscan explicar este fenómeno Morales y González (2011) sostienen que esta sería una característica propia del electorado de La Araucanía, donde la pertenencia étnica de la población regional que se identifica como mapuche no tiene mayor incidencia en el comportamiento electoral.

En esta misma línea, Toro y Jaramillo-Brun (2014) además establecen que los electores mapuches prefieren votar por partidos más institucionalizados que puedan generar una influencia efectiva en el Estado y también apoyan más a candidatos mapuches, lo que es denominado como “solidaridad étnica”.

En cuanto a la participación y éxito de los candidatos mapuches, se ha establecido que la mayor cantidad de ellos participa desde alguna de las dos coaliciones más tradicionales de izquierda y derecha que funcionan en el sistema político chileno (Herrea y Soto, 2016), aunque según señalan los autores, la pertenencia étnica de los candidatos es su principal barrera de entrada para el éxito electoral.

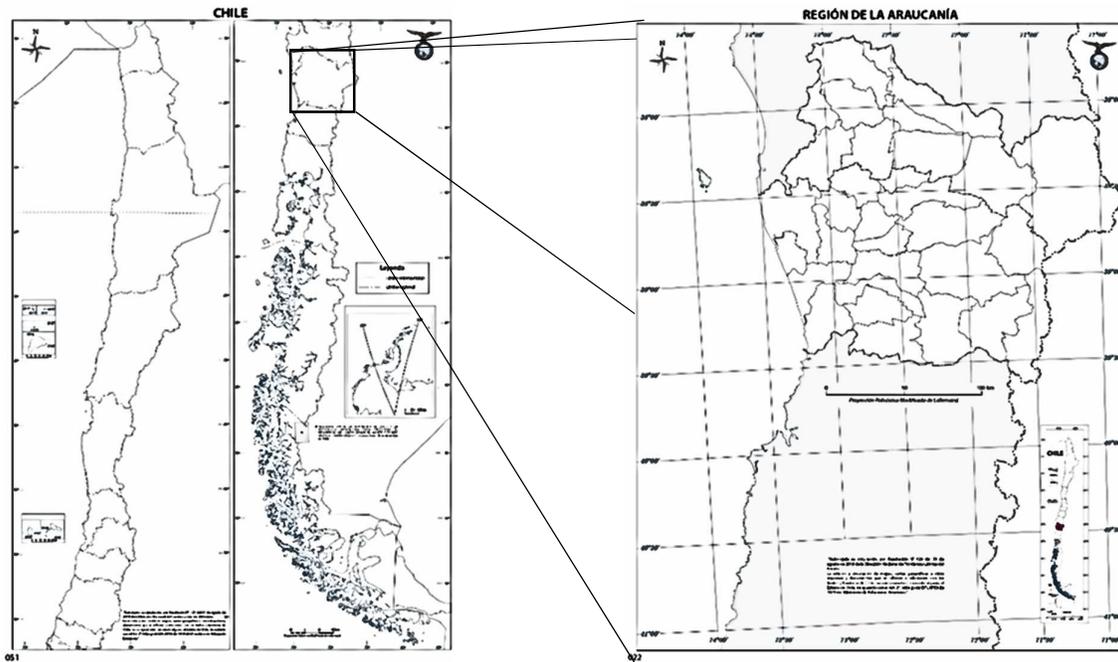


Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 2017.

Es así como, la exclusión política es otra de las dificultades institucionales que afectan a las poblaciones indígenas en Chile, esta se manifiesta en la subrepresentación o ausencia de representantes indígenas en las instituciones políticas del país, como el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas (Aylwin, Meza-Lopehandia y Yáñez, 2013). Desde el retorno a la democracia en 1990, la población mapuche no ha vuelto a tener representación en el Congreso al nivel que alcanzaba antes de la dictadura. Además, la legislación vigente acerca de partidos políticos excluye la posibilidad de formar partidos regionales, exigiendo la formación de ellos en al menos 3 regiones geográficamente consecutivas o en 8 regiones geográficamente no consecutivas del país (Aylwin, Meza-Lopehandia y Yáñez, 2013).

En este sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (DDPI), señala que los pueblos indígenas tienen derecho a desarrollar sus propias instituciones tanto políticas, como de otra índole y si lo desean pueden participar en las del Estado correspondiente, aplicando mecanismos que prevengan una posible *guetización* de los pueblos indígenas y estipulando que los Estados deben garantizar la plena participación de los pueblos indígenas en los asuntos públicos del país, ya sea generando legislación exclusiva que les garantice participación política o implementando medidas para la diversificación interna de los partidos mayoritarios (Aylwin, Meza-Lopehandia y Yáñez, 2013).

En lo que respecta a los métodos utilizados por algunas organizaciones del pueblo Mapuche para conseguir sus reivindicaciones, Vergara y Foerster (2002) señalan que, tanto para los medios, como para cierta dirigencia mapuche, las organizaciones que estos han generado se posicionan fuera de la ley, configurándose muchas veces como símbolos de rebeldía. Mientras que, en los sectores políticos más conservadores se hace una lectura similar, pero desde la transgresión del derecho de propiedad y de la escalada de violencia, que traen como consecuencia la amenaza a la seguridad física de las personas y a la inversión privada, principalmente en la Región de La Araucanía (Vergara y Foerster, 2002).



Mapa N°1: Chile, por regiones  
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), 2019.

Mapa N°2: Región de La Araucanía, por comunas  
Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM), 2019.

En lo relativo a la participación y organización política de los mapuches, en el ámbito rural existen diversas organizaciones como la *Aukiñ Wallmapu Ngulam* o Consejo para Todas las Tierras y la Coordinadora Arauco-Malleco, que son las más reconocidas, además de una gran cantidad de reducciones y comunidades. En tanto que, en el ámbito urbano la organización es más débil, a excepción de los estudiantes universitarios mapuches de Temuco y Santiago (Vergara y Foerster, 2002), actualmente hay que sumar a estos a la Fundación Encuentro Nacional Mapuche (ENAMA) y la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (AMCAM).

El movimiento social mapuche, si bien es uno de los que se ha podido mantener más activos y autónomos frente al Estado de Chile, también ha encontrado dificultades para incorporar a amplios sectores de la sociedad mapuche en sus luchas reivindicativas, puesto que estas siguen estando restringidas a ciertas comunidades (Vergara y Foerster, 2002). No obstante, Durston (2012) destaca la memoria social presente principalmente en la población indígena como una forma de capital social de los sectores populares, que Salazar (2001) denomina 'capital social subsidente'.

### 2.3.1 El caso de Wallmapuwen

En lo que respecta a la participación política de los mapuches como alternativa política, resulta interesante que una facción políticamente organizada de ellos, buscaran influir de forma institucionalizada en la política chilena a través de la formación del partido Wallmapuwen (Gutiérrez-Chong y Gálvez, 2017), lo que difiere de otras estrategias políticas que han desarrollado algunas agrupaciones indígenas en América Latina. Es así como, en diciembre del

año 2005, se dio a conocer de forma pública la conformación de Wallmapuwen a través de la siguiente declaración en el periódico mapuche Azkintuwe, que circuló en Chile y Argentina entre el 2003 y el 2013, dirigido por el periodista Pedro Cayuqueo:

“Desde hace ya dos meses un grupo de mapuches hemos iniciado un diálogo respetuoso y franco tendiente a visualizar salidas al actual estado de estancamiento en que se encuentra el movimiento mapuche. Este diálogo ha tenido como punto de partida consensuado la necesidad de dar un salto adelante en la lucha organizada de nuestro pueblo mediante la conformación de un Partido Político Mapuche, de carácter Autonomista y Nacionalitario” (AZkintuwe, Año 3, N° 17, Diciembre-Enero, 2006)

Para Marimán (2012) la creación de Wallmapuwen y los principios que lo regían, significaron una “voluntad de auto afirmación política” de todos los mapuches, proponiendo una nueva oportunidad para la búsqueda de empoderamiento político, estableciendo de forma concisa un discurso etnonacionalista y demandas de tierras que esta vez no estaban ligadas a una reivindicación gremial étnico-campesina, de carácter económico, asistencialista y culturalista, que dominó el debate del siglo XX, sino que estaban ligadas al concepto de autonomía.

Esta nueva voluntad política, a la que se ha hecho alusión, difiere de lo que Marimán (2012) ha señalado como una voluntad política que estuvo vigente anteriormente, en la que los mapuches se limitaban a actuar como clientela política o como grupo de presión, además señala que algunos sectores del electorado mapuche continúan funcionando bajo estas lógicas.

Entre el año 2007 y 2015, el Servicio Electoral de Chile (Servel) rechazó seis veces la solicitud de inscripción de Wallmapuwen como partido político. Durante la segunda mitad del 2015, el Servel lo declaró como ‘partido político en formación’ dando paso al proceso de recolección de firmas para su constitución formal, logrando así, constituirse como partido político durante el 2016, pudiendo participar en las elecciones municipales de ese año. Es así como consiguieron un escaño en el Concejo Municipal de la comuna de Galvarino, de los 32 candidatos a concejal que había inscrito en toda la región.

Luego del fracaso electoral, el 2017 el Servel disolvió el partido, debido a que no contaba con la cantidad mínima de militantes que exige la legislación. En este sentido, se puede entender que Wallmapuwen y su propuesta etnonacional, no lograron tener éxito a nivel de penetración social a través del discurso y el posicionamiento de candidatos, como tampoco logró hacerlo a nivel electoral y competitivo. Por otra parte, ante la inexistencia histórica de una fuerza política mapuche organizada, los candidatos mapuches han preferido establecer alianzas con partidos ya consolidados (Marimán, 1994). En este sentido, Gutiérrez-Chong y Gálvez (2017) señalan que la intervención de partidos políticos consolidados en las estructuras internas de las comunidades mapuches ha mermado el fortalecimiento del movimiento indígena en tanto actor social y ha generado una dinámica de alianzas políticas con coaliciones tradicionales.

## 2.4 Estrategias de penetración de los partidos políticos en Chile

En Chile, al igual que en el resto de los países latinoamericanos, las relaciones políticas entre los sectores populares y las oligarquías se desarrollan tempranamente desde el clientelismo, mediante las incipientes clases medias (Barozet, 2004). Según explica Valenzuela (2016), desde fines de los años 60' que el clientelismo paulatinamente se vuelve fundamental para la movilización de recursos desde el centro a la periferia, paralelamente a la consolidación del sistema político, cuyo funcionamiento se basa en la competencia entre los intermediarios o *brokers* políticos, más que en la relación patrón-cliente de forma directa.

De acuerdo con lo señalado por Arriagada (2013), al analizar el caso de Santiago observa que actualmente existe una baja participación formal de los militantes en los partidos políticos a nivel comunal, generando un bajo nivel de penetración de los partidos en las bases sociales, por ende, los militantes activos deben establecer vínculos informales con los intermediarios, por lo que la actividad territorial de los partidos se ve afectada por la eficiencia en la elaboración y reproducción de las redes informales.

Por otra parte, Barozet (2004) destaca el caso de la comuna de Iquique, donde el carisma, como dimensión simbólica en la movilización de los votantes, y el clientelismo político, como dimensión estructural de la movilización, resultan de alto nivel explicativo en la relación entre los sectores populares y las autoridades, además sostiene que gran parte del apoyo electoral que recibe el candidato analizado proviene de poblaciones excluidas, más allá de que no se encuentran en un contexto de crisis social explosiva. Asimismo, Remmer (1984) indica que tanto la representación proporcional como el pequeño tamaño de los distritos electorales resultan más propensos a generar dinámicas de clientelismo político.

Barozet (2004) establece que producto del menor interés de los chilenos en la política en el periodo posterior a la dictadura, las redes clientelares actualmente se estructuran de forma más sigilosa respecto a las dinámicas clientelares que se daban en el periodo entre el 20' y el 73'. Asimismo, durante dicho periodo, la relación entre los actores de la sociedad civil y el sistema estatal, estuvieron marcadas por un modelo económico de desarrollo 'hacia adentro', en un sistema político que canalizaba los intereses de los actores sociales a través del "Estado de compromiso" (Delamaza, 2012). Estas dinámicas se transformaron drásticamente durante la dictadura, lo que produjo mayor fragmentación, autonomización y acción del mercado entre los actores sociales actuales (Delamaza, 2012).

En lo que respecta al "Estado de compromiso" previo a la dictadura, Salman (2002) lo considera parte fundamental de la estructuración de la relación entre el Estado y la sociedad chilena, particularmente con los estratos sociales bajos, lo que conllevó a una percepción de decencia en la clase política y en las instituciones públicas chilenas, tanto en lo que respecta a la rendición de cuentas como en el trato a los usuarios que acudían a las oficinas públicas. Junto a lo anterior, Salman (2002) destaca la relevancia de los partidos políticos como intermediarios clave para la promoción de intereses en los distintos estratos sociales. Es por ello que el autor sostiene que "los partidos eran claramente distinguibles por su ideología, sus vínculos con las clases sociales o sectores específicos del electorado y su posición en el espectro político

derecha/izquierda. Predominaba un discurso más ideológico que populista, clientelista o programático” (Salman, 2002: 220).

Actualmente, los partidos políticos deben enfrentar el desafío de penetrar y representar a una sociedad cuyo dinamismo económico se expresa a través de ciertos márgenes de inclusión socioeconómica por la vía del consumo, pero que a la vez mantiene y en ciertos casos profundiza la desigualdad social, además de debilitar los mecanismos de integración social interna, dentro de un sistema político que no promueve la participación y se vuelve cada vez más elitista (Delamaza, 2012).

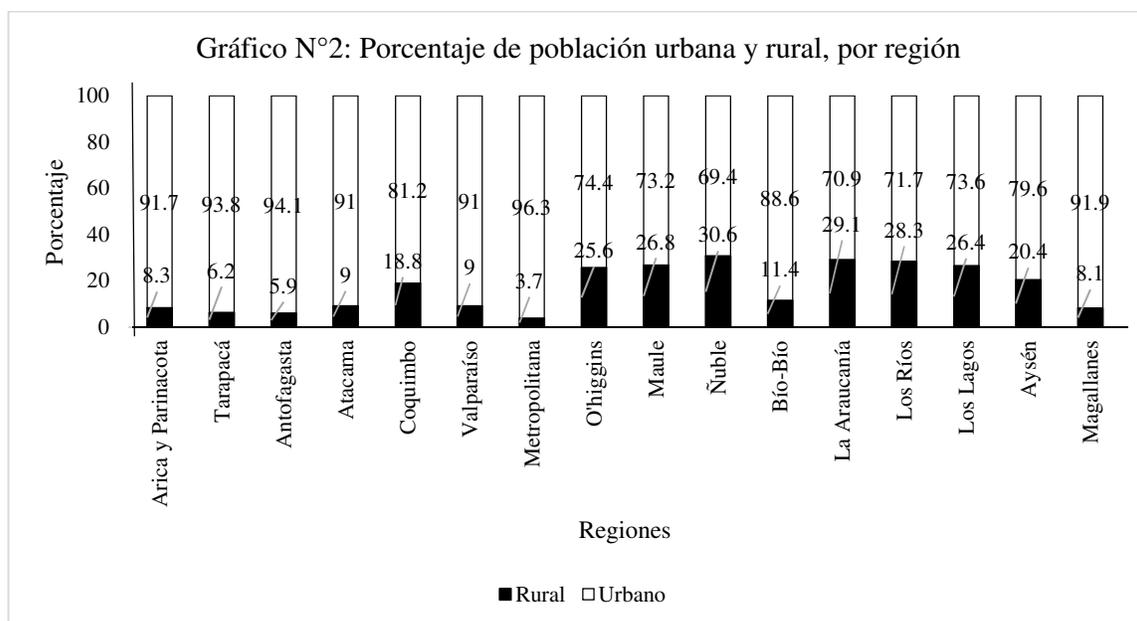
Al observar en específico la penetración de los partidos en los sectores rurales, estos tienden a expresarse mayormente representados por los sectores políticos conservadores (Toro y Jaramillo-Brun, 2014; Morales y González, 2011 y Valdés, 2006). Por ende, resulta interesante revisar estas dinámicas con mayor detalle.

#### 2.4.1 Ruralidad y cultura política en Chile y La Araucanía

De acuerdo con los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadística de Chile (INE) en relación con los resultados del Censo 2017, la población total alcanzaba a ser de 17.574.003 habitantes, de los cuales 2.149.469 personas habitan en las áreas rurales, es decir, una cifra equivalente al 12,2% de la población total. Sin embargo, la Región de La Araucanía se presenta como la segunda del país en cuanto a porcentaje de población rural, siendo sólo superada por la nueva Región del Ñuble, con un 29,1% y un 30,6% de la población total regional respectivamente (Ver gráfico N°2).

Según los datos entregados por la encuesta CASEN 2017 ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile, la población rural del país en situación de pobreza supera ampliamente a la población urbana en la misma situación, obteniendo un 16,5% y un 7,4% respectivamente. La misma relación se da en el caso de la pobreza extrema, donde un 4,4% de la población rural del país en esta condición versus un 2,0% de la población urbana. Al prestar atención a los datos de los gráficos N°2 y N°3, se puede observar que las 10 regiones con mayor cantidad de población rural coinciden con las regiones con mayor porcentaje de población en situación de pobreza, a excepción de la Región de Aysén que, si bien es altamente rural, es una de las que cuenta con menor porcentaje de población en situación de pobreza.

En el caso de la Región de La Araucanía, la encuesta CASEN 2017 muestra que la región es la que tiene la mayor cantidad de población en situación de pobreza en el país (ver gráfico N°3), alcanzando el 17,2% de la población regional.

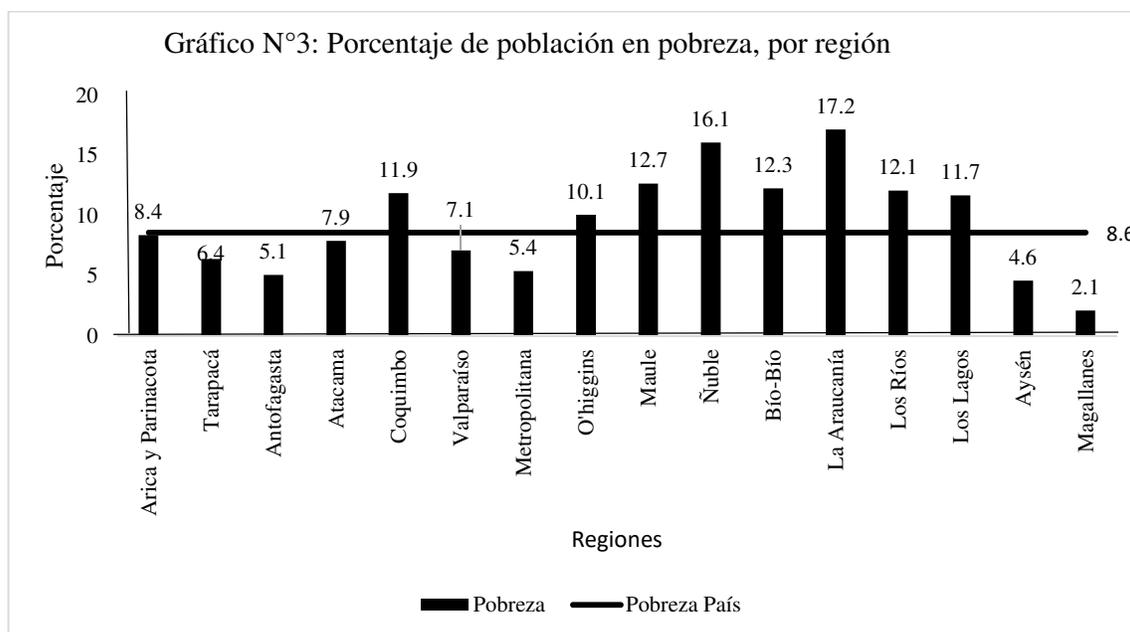


Fuente: Síntesis de Resultados Censo 2017, Instituto Nacional de Estadísticas, 2018.

Al analizar las dinámicas políticas de la ruralidad mediante un análisis histórico, Kay (1980) enfatiza en las particularidades que presenta la sociedad rural chilena, en comparación a la situación general de los países latinoamericanos en torno a la estabilidad relativa que se observaba a nivel político y social. Dicha situación, sólo se transformó con la implementación de la reforma agraria, generando así un desarrollo vigoroso de un movimiento político y social en el campo chileno, que culmina con el golpe militar de 1973, donde se ha sostenido que la movilización campesina fue uno de los principales factores del quiebre democrático (Kay, 1980).

Al observar la conformación de la élite latifundista en Chile, es posible encontrar una heterogeneidad estructural, principalmente en lo que respecta a su origen, por una parte en la aristocracia tradicional y por otra, en una nueva generación de terratenientes empresariales, esto además se encontraba fuertemente ligado a la forma en la que los terratenientes establecían las relaciones con sus inquilinos, trabajadores y campesinos cercanos, lo que se tradujo en uno de los principales factores de la estrategia terrateniente para enfrentar la reforma agraria a mediados del siglo XX (Órdenes y Díaz-Diego, 2018).

Órdenes y Díaz-Diego (2018) sostienen que, en el desarrollo de la reforma agraria, no estaban contempladas las dinámicas agrarias de los pueblos indígenas, lo que supuso una nueva dificultad en La Araucanía, puesto que el foco de los ideólogos de la reforma apuntaba a superar la agricultura tradicional de los latifundistas aristocráticos y no contaba con una mirada étnica. No obstante, para la época en el sur de Chile existían predios más tecnologizados, con mayor cantidad de trabajadores permanentes y más especializados que en la zona central del país, a pesar de que contaban con similares niveles de proletarianización (Órdenes y Díaz-Diego, 2018).



Fuente: CASEN, 2017.

Según establece Kay (1980) de entre los términos caudillismo, caciquismo y clientelismo, que usualmente tienden a relacionarse con las dinámicas políticas del campesinado, en el caso chileno el clientelismo sería el concepto más atingente. En este sentido, las relaciones clientelares en el campo chileno presentan una evolución a medida que se van complejizando, Kay (1980) distingue 4 niveles, estos son: i) relación cliente-terrateniente; ii) cliente-sindicato; iii) cliente-partido político; y iv) cliente-Estado.

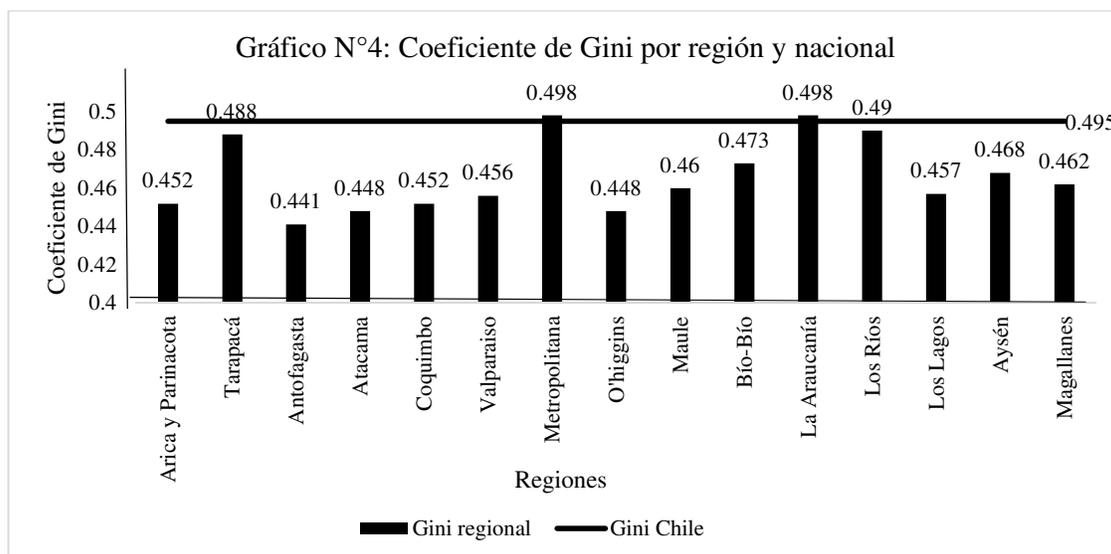
No obstante, Kay (1980) le concede al caciquismo cierta capacidad explicativa del comportamiento político en el campesinado chileno, puesto que se transforma en un sistema articulador de estructuras de mediación entre los campesinos con el sistema político nacional. El caciquismo, logra permear el sistema formal de poder desde la organización informal (Kay, 1980). Los mecanismos que utiliza el cacique para ejercer su poder son muy variados y van desde el dominio ideológico a través de la religión, las tradiciones culturales y las relaciones de parentesco (reales o ficticias), hasta la intimidación y la violencia física (Kay, 1980).

A pesar de que Huchim (2012) observa la historia mexicana, resulta interesante destacar la propuesta teórica que realiza al señalar que el caciquismo -o neocaciquismo- a través de la corrupción y el debilitamiento de la rendición de cuentas, termina por generar el desencanto de la población con respecto a la democracia, similar a lo que han señalado Kay (1980) y Órdenes y Díaz-Diego (2018), por ende afecta al comportamiento electoral y al sistema político y democrático en su conjunto.

En esta relación simbiótica entre el campesino y su cacique, este último logra la dependencia de los campesinos a través de su poder económico, mientras que a través de su poder político impulsa al campesino a acceder a los recursos del Estado y por ende a beneficiarse de políticas públicas (Kay, 1980). En este sentido, Oyarzun y Miranda (2011), observan 4 factores que

agravan la situación de la población rural: i) Precarias condiciones de producción, que en su mayoría son parte de economías de subsistencia; ii) Deterioro socio-espacial, que se manifiesta en la falta de servicios públicos (infraestructura de salud, educación, servicios básicos, conectividad y comunicación); iii) Situación de pobreza e indigencia; y ligada a esta, iv) la desigualdad social es mayor en las regiones con mayor población rural (ver gráfico N°4).

En lo que respecta al cuarto factor señalado por Oyarzun y Miranda (2011), los resultados arrojados por la encuesta CASEN 2015 no respaldan su observación, no obstante, sigue siendo válida para el caso de la Región de La Araucanía (ver gráficos N°2, 3 y 4). En lo que respecta a la falta de servicios públicos e infraestructura, en la Región de La Araucanía no sólo la pobreza (incluida la pobreza extrema) llega a ser alrededor del doble del promedio nacional, sino que la mortalidad infantil llega a ser el triple de la nacional, siendo aún mayor en comunas indígenas como Ercilla, Teodoro Schmidt y Lumaco, llegando a los niveles que tenía Chile hace más de medio siglo atrás, en materia educacional el año 1996 en la denominada “Araucanía profunda” se encontraban 26 de las 44 escuelas peor evaluadas del país (Gissi, 2004).



Fuente: CASEN, 2015<sup>1</sup>

La situación de la Región de La Araucanía es muy decisora en cuanto a la ruralidad en Chile debido a que, desde la anexión definitiva del territorio al país, su vocación productiva fue silvoagropecuaria, lo que generó una estructura social de carácter agrario con la hacienda como eje central (Bauer, 1994). Además, Henríquez (2013) señala que la agricultura indígena se integró tempranamente con la agricultura no indígena al modelo de acumulación económica de La Araucanía, ocupando un rol de subordinación hasta entrada la época del 60' y la aplicación de la Reforma Agraria. Con posterioridad al golpe de Estado, se implementa una contrarreforma agraria que se orienta hacia la agricultura empresarial, generando una apertura

<sup>1</sup> En el año 2015 la Región de Ñuble era parte de la administración político-administrativa de la Región del Bío-Bío.

económica radical que impactó principalmente a los cultivos tradicionales que son la base de la agricultura familiar y de subsistencia los que son principalmente reemplazados por plantaciones forestales (Henríquez, 2013).

La evolución en la legislación de las tierras indígenas en Chile también ha aportado a generar un círculo vicioso de pobreza en la población rural e indígena de La Araucanía, que encuentra consecuencias en lo establecido por Oyarzun y Miranda (2011) y Gissi (2004), relacionado principalmente al deterioro socioespacial. En este sentido, un estudio elaborado por la Universidad de La Frontera (2011) da cuenta de que sólo un 40% de las familias beneficiadas con los procesos de recuperación de tierras indígenas hacen uso de los predios de forma efectiva, quedando relegados a situaciones de pobreza y falta de equipamiento.

Henríquez (2013) observa que la capacidad económica estatal a nivel regional se ve superada por las necesidades que existen en el territorio, ya que sólo para la habilitación de las tierras adquiridas en el marco de las políticas de recuperación de tierras indígenas (planes de agua potable rural, de electrificación rural y conectividad vial), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2011 estimó que para el año 2018 el Estado de Chile contaría con una demanda insatisfecha de 800 millones de dólares en las regiones de Bío-Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos para este respecto, de los cuales, el 70% corresponde a recursos requeridos en La Araucanía.

Resulta importante destacar que Henríquez (2013) concluye que una de las falencias que se encuentran en la Región de La Araucanía dice relación con la falta de cohesión social que encuentra su origen en la discriminación, marginación y exclusión social que se ha vivido a través de la historia en La Araucanía rural, y donde muchas veces las políticas públicas implementadas han perpetuado esta situación.

#### 2.4.2 Caracterización del electorado mapuche

Los resultados de la encuesta “Los mapuches rurales y urbanos hoy” desarrollada por el Centro de Estudios Públicos (CEP) el 2016, muestra interesantes resultados en torno a la confianza y evaluación de instituciones, la cultura y la identidad, el conocimiento y uso de la lengua mapuche, la participación en ritos y ceremonias, la migración campo-ciudad y la percepción alrededor del denominado “conflicto mapuche”, tomando una muestra representativa de las cuatro regiones del país en las que habitan el 90% de la población mapuche del país, según el Censo 2002 (Bío-Bío, La Araucanía, Los Lagos<sup>2</sup> y Metropolitana), la muestra permitió generar resultados comparativos entre mapuches y no mapuches y no se hicieron análisis diferenciados por región, por lo que los resultados son a nivel general.

En cuanto a la confianza y evaluación de las instituciones, los resultados son decisivos en tanto a que Carabineros de Chile figura como la institución que genera mayor confianza tanto en mapuches como en no mapuches, seguida muy de cerca por las Fuerzas Armadas y la Policía de Investigaciones, desde un poco más lejos son seguidas por las municipalidades. Mientras

---

<sup>2</sup> La Región de Los Ríos fue excluida porque se formó administrativamente el año 2007.

que los partidos políticos, el Congreso y los Tribunales de Justicia son las instituciones que generan menor confianza en mapuches y no mapuches. En lo que respecta a la existencia de escaños reservados para indígenas en el proceso, tanto mapuches y no mapuches apoyan la propuesta, con un 65% y 55% de encuestados que se manifestaron de acuerdo o muy de acuerdo, respectivamente.

En lo relativo a la cultura e identidad, la encuesta muestra que en su mayoría los mapuches se sienten chilenos y mapuches a la vez, con un 42%, mientras que sólo el 7% de los mapuches encuestados se siente sólo chileno y el 34% de los mapuches encuestados se siente sólo mapuche. Es interesante destacar que en general los mapuches se sienten en su mayoría plenamente integrados a la sociedad chilena, ya que un 73% de los mapuches que viven en sectores urbanos y un 82% de los mapuches que viven en sectores rurales, declararon sentirse así. Además, señalan que las comunidades mapuches deberían integrarse más al resto de Chile y no buscar mayor autonomía, según el 70% y el 75% de los mapuches urbanos y rurales encuestados, respectivamente.

Los resultados de las áreas de participación en ritos y ceremonias y conocimiento y uso de la lengua mapuche no serán expuestos, debido a que no dicen relación con el objetivo de esta tesis. Por otra parte, en lo que respecta a la migración campo-ciudad, todos los grupos encuestados consideran que los mapuches rurales viven mejor que los mapuches urbanos. Mientras que un 45% de los mapuches urbanos y un 60% de los mapuches rurales, consideran que pierden su cultura al migrar a la ciudad.

En la sección que dice relación con las tierras, un 45% y un 49% de los no mapuches y mapuches, respectivamente, señalaron que la mejor forma para que el Estado compensara o reparara al Pueblo Mapuche es a través de la restitución de tierras, mientras que un 16% del universo de encuestados indicó que lo sería el reconocimiento institucional, sólo un 2% de los encuestados mapuches y un 3% de los no mapuches, señalaron que preferían que el Estado ceda autonomía al Pueblo Mapuche.

De acuerdo a lo señalado por los encuestados acerca de sus percepciones del conflicto, un 67% de los encuestados mapuches y un 68% de los no mapuches indicaron que la situación política de la Región de La Araucanía era mala o muy mala, además un 57% de los mapuches y un 63% de los no mapuches señalaron que la situación es peor que hace 10 años atrás, por ende, un 69% de los encuestados mapuches y un 74% de los no mapuche dijeron que la convivencia en La Araucanía es violenta o muy violenta, junto a ello, un 68% de los mapuche y un 71% de los no mapuche indicaron que la convivencia en la región es menos pacífica que hace 10 años atrás.

Por otro lado, el 44% de los encuestados no mapuches y el 43% de los encuestados mapuches señalaron que hay mayor conflicto entre las comunidades mapuches y los Carabineros, seguido por un 39% de todos los encuestados que indicaron que había mayor conflicto entre las comunidades mapuche y las empresas forestales y un 34% que destacó la existencia de un mayor conflicto entre las comunidades mapuche y el Estado de Chile. Sin embargo, los encuestados mapuches urbanos son quienes ven mayores conflictos que los

encuestados mapuches rurales. No obstante, en general los encuestados mapuches han sostenido que el uso de la fuerza para el reclamo de tierras no se justifica.

Otros estudios (ver *latinobarómetro* 2012) observan que en La Araucanía los mapuches de zonas rurales presentan menor escolaridad y manifiestan mayor adscripción a la religión evangélica, respecto de no mapuches y mapuches urbanos. Mientras que los mapuches de zonas urbanas de La Araucanía registran menores niveles de ingreso y se posicionan políticamente más a la izquierda que los no mapuche y mapuches rurales, por otra parte, los habitantes no mapuches de zonas rurales se posicionan políticamente más a la derecha y los de zonas urbanas se caracterizan por tener mayores niveles de escolaridad (Luna, Toro, Salas y Jaramillo-Brun, 2012).

Respecto al posicionamiento de los votantes mapuche en el espectro político, Valdés y González (2006) establecen que estos se ubican más a la izquierda que los votantes no mapuches y que presentan menor nivel de identificación con posturas conservadoras que la población no mapuche.

Por lo tanto, las dificultades electorales que enfrentó Wallmapuwen en La Araucanía durante su existencia y la participación de candidatos mapuche en las elecciones dentro de las principales coaliciones del país, bien se pueden explicar por las conductas decimonónicas presentes en el sistema político y las similitudes en el discurso y propuestas de estas coaliciones, las que hacen irrelevantes otros factores, como por ejemplo los valores post materialistas, en el proceso de definir el comportamiento electoral y la intención de voto del electorado (Morales, 2016, Dodds, 2017). En este sentido, existe un correlato a nivel nacional donde el sistema electoral funciona con baja volatilidad y, sin embargo, hay una baja identificación programática con los partidos políticos (Morales, 2014).

Estos fenómenos abren paso a estrategias informales de intermediación y penetración de los partidos políticos a nivel territorial, lo que conlleva a la articulación de redes clientelares en el territorio, tanto a nivel nacional como subnacional.

## **2.5 Clientelismo político en Chile**

Para Wolf (1963) el clientelismo es una forma de ‘amistad instrumental’ desigual, mientras que, según Auyero (2001), el clientelismo político se entiende como el intercambio de favores por votos. Ante esto, Durston (2012) da cuenta del clientelismo como un intercambio relacional que pretende generar y mantener una relación personal duradera entre dos personas. En este sentido, Rehren (2000) señala que el clientelismo político está basado en transacciones asimétricas, principalmente a causa de la estratificación social donde existen estructuras de poder desiguales y asimétricas. Asimismo, Durston (2012) constata que el clientelismo está completamente introducido en las instituciones y prácticas políticas de las regiones que observó durante su investigación (La Araucanía, Bío-Bío y Coquimbo), mientras que Rehren (2000) destaca los efectos del clientelismo político en la maximización de la influencia que ejercen los sectores movilizados por los partidos políticos y en la cooptación y control que las élites partidistas obtienen sobre su clientela.

Según Durston (2012), la situación en torno al Intendente de la Región del Bío-Bío y la oposición de la región (en esa época de derecha) a través de Consejeros Regionales y Alcaldes, durante el año 2000 y 2009, disminuyó “el flujo de fondos públicos a alcaldes de derecha, debilitando así sus posibilidades de ejercer clientelismo de oposición con fondos del gobierno de la Concertación” (p.380), sin embargo, esta disminución en el flujo de recursos terminó por frenar la idea de descentralización democratizante que había sido la impronta del gobierno de la Concertación. Es así como, Durston (2012) concluye que lo que se logró fue democratizar el clientelismo, a pesar de que la descentralización participativa, que era el siguiente paso, solo alcanzó un desarrollo incipiente.

Sin embargo, Rehren (2000) también señala que el afán de los partidos políticos por capturar representatividad en los nuevos sectores sociales que se fueron incorporando al quehacer político del país mediante estrategias clientelares, afectando al comportamiento político y electoral y que derivó en la reducción del ejercicio autónomo de la ciudadanía y de la conciencia cívica, por lo tanto, la democracia chilena aparece como una democracia formal en términos de los procedimientos democráticos, pero carente de la participación libre y autónoma de los ciudadanos.

Durston *et al.*, (2005) muestran como el concepto chileno de *pituto*, que tiene conceptos similares en otros países de América Latina, no es sólo una demostración del alcance del clientelismo político, sino que además muestra la relación entre este y el capital social que mantienen los clientes.

### 2.5.1 Clientelismo en La Araucanía

De Cea y Fuentes (2016) destacan la relevancia de vínculos y rituales no programáticos para el electorado de la región, los que generan mayor éxito en las candidaturas, independiente del sector político al que pertenezcan y a las estrategias y estilos de campaña electoral que implementen, lo que se condice con lo señalado por Morales (2016) respecto a que se pueden generar sistemas de partidos institucionalizados y, por ende, con baja volatilidad, sin generar un vínculo programático con los electores. En este sentido, Herrea y Soto (2016) señalan que el comportamiento de candidatos mapuche incumbentes no varía respecto con el comportamiento de sus pares incumbentes no mapuches.

Además, Durston (2012) señala que en La Araucanía el clientelismo político se podría resumir como una evolución desde una primera etapa de caudillos hasta una etapa de *brokers*, donde el clientelismo ha ido más allá que un mero intercambio de favores por votos y que integra también una emocionalidad y un sentimiento de reciprocidad. Por otra parte, también destaca dentro de la evolución del vínculo clientelar en la región y diferencia entre dos tipos de clientelismo, el primero asociado al vínculo ‘patrón-cliente’, de corte clásico, en el que se encuentran dos subtipos, el de caudillo y el de caciques locales, el segundo de estilo más moderno, en los que se encuentran los *brokers* que, cumpliendo una función más bien mediadora, compiten entre ellos y los gestores o ‘*gestionadores*’ (Durston, 2012).

Dentro de estos tipos de clientelismo que Durston (2012: 374) pudo observar existe una serie de matices entre los que destacan:

- El clientelismo como inclusión interétnica tanto en una relación asimétrica e interclase, como en una forma personalizada de capital social individual para el cliente.
- Fenómeno antiguo, pero de gran vigencia actual que ha evolucionado en sus formas de manifestación específica.
- De acuerdo con lo señalado anteriormente, existe una amplia variedad de roles y de relaciones que se vinculan con diversas situaciones de clientelismo.
- A pesar de que el clientelismo no concuerda con los ideales democráticos, estos conviven en la democracia real y generan beneficios concretos para los estratos más pobres.
- Más allá de ‘favores por votos’, cumple una función en tanto refuerza un vínculo afectivo y genera una “extensión ‘hacia arriba’ de las redes de ayuda recíproca en las estrategias de supervivencia propias de los estratos populares”.
- Existe una evolución de los modelos clásicos de clientelismo hacia estrategias modernas de ‘*gestionadores*’ o coproductores entre facciones semiclientelares y los clientes de estratos sociales más bajos.

Es así como, Durston (2012) concluye que el clientelismo político en La Araucanía funciona como un mecanismo de reducción de las asimetrías sociales, dada la pequeña cantidad de organizaciones populares que funcionan de forma autónoma, sin verse inmersas en redes clientelares. Asimismo, el autor señala que en la región es posible encontrar “toda la gama de figuras y relaciones de tipo clientelar. Muchos dirigentes y *líderes gestionadores* operan para satisfacer las necesidades de sus comunidades de extrema pobreza, negociando pactos clientelares y buscando ‘buenos patrones’” (p. 378).

### **Capítulo 3: Comportamiento político-electoral en La Araucanía**

Existen diversos factores que pueden incidir en el comportamiento electoral en un territorio, en La Araucanía se han realizado diversos estudios con el propósito de explorar las dinámicas políticas, económicas y culturales que configuran el comportamiento electoral de la región (ver Toro y Jaramillo-Brun, 2014, Morales y González, 2011, entre otros). No obstante, sigue siendo necesario continuar avanzando en el estudio de estos fenómenos, que aporten en la comprensión los factores que influyen en el comportamiento electoral y político de las poblaciones.

En esta línea, Contreras y Morales (2017) han señalado que es posible establecer la existencia de la solidaridad étnica en el comportamiento electoral a nivel de elecciones municipales en comunas como Saavedra, Curarrehue y Cholchol, en La Araucanía, siendo coincidentes con los aportes realizados por Dahl (1963) y Miller (1971), en relación con la identificación étnica y su vínculo con el apoyo y lealtad obtenido en sus grupos étnicos. En este sentido, Contreras y Morales (2017) plantean que la combinación de alineamiento ideológico y pertenencia al grupo étnico se convierte en la fórmula ideal para el éxito electoral de coaliciones y partidos políticos en La Araucanía, lo que además explica la relevancia de los partidos tradicionales en la política regional.

Asimismo, Fuentes, De Cea y Teitelboim (2019) sostienen que, en comunas con mayor población indígena en Chile el interés por participar en las elecciones es mayor que en las comunas no indígenas, lo que se intensifica aún más cuando las candidaturas parecen ser exitosas. Sin embargo, manifiestan que el comportamiento político de las comunas con mayor población indígena del país es disímil a un nivel que no es posible determinar un tipo de preferencia ideológica que explique el fenómeno para todas; no obstante, lo que hallaron fue que la interacción de pobreza y autoidentificación étnica impacta en la participación electoral y en la preferencia ideológica.

En las entrevistas realizadas de forma personal, el análisis es concluyente en cuanto a que el comportamiento electoral en La Araucanía difiere según el enfoque territorial que se adopte, debido a que resulta interesante a nivel comunal observar la influencia que tiene el tamaño y composición étnica en la demografía de las ciudades, sobre el comportamiento político y electoral que ellas tienen. Sin embargo, al observar a la región en su conjunto los entrevistados destacan que la población indígena en la zona no es capaz de definir una elección, debido a que sólo representan alrededor de un tercio de los votantes, además de señalar que el electorado de La Araucanía es ideológicamente conservador y con dinámicas patronales altamente arraigadas.

#### **3.1 La etnicidad como tensión entre el Estado y la Sociedad en La Araucanía**

La etnicidad como estrategia aparece constantemente en la tensión existente en la relación Estado-Sociedad en La Araucanía, tal como expone Cayuqueo (2016) donde se refiere a esta señalando: “Empantanados los mapuches en la demanda de “tierras”, los medios en la “crónica roja”, el empresariado en la “amenaza comunista” de los sesenta y el Gobierno en el “enfoque

pobreza”, discusiones de primer orden mundial en torno a nuevos modelos de Estados, tipos de ciudadanías y estándares democráticos brillan por su ausencia del debate público en materia indígena” (p.40).

Lo señalado por Cayuqueo (2016) se ve de alguna forma reflejado en lo que ha sostenido la Senadora Carmen Gloria Aravena (ex Evopoli, actual RN), quien ha manifestado en una entrevista al periódico “Primera Nota” que la seguridad ciudadana, vinculada al denominado “conflicto mapuche” es un tema fundamental para el desarrollo económico de La Araucanía y señala: “yo sí creo que hay terrorismo en la región, pero esto (instalación del Comando Jungla en la zona de conflicto, que es un grupo de Carabineros de Chile entrenados en la selva colombiana, cuyo anuncio causó una gran polémica) viene a criminalizar aún más, creo que en el apuro producto del gran compromiso moral que tiene este gobierno (el de Sebastián Piñera) con La Araucanía, por la alta votación que obtuvo, quizás se equivocó en términos mediáticos” (Primera Nota, 30 de julio de 2018).

Por otra parte, el Senador Francisco Huenchumilla (DC) ha sostenido que se considera el primer Senador mapuche en la historia de Chile, y destaca el apoyo que obtuvo en zonas urbanas, especialmente en Temuco (comuna de la que fue alcalde), como un factor clave en su elección, además del apoyo electoral en las comunas con alto porcentaje de población mapuche. En relación con las temáticas relativas a la etnicidad, señala que: “la receta que ha fracasado es la de seguridad, el conflicto se ha tratado de orden público. El prisma debe ser político. La política debe aceptar la realidad. Reconocer que hubo un despojo. A partir de ello se puede comenzar por abrir lo otro. Pero seguir pensando que todo es de seguridad es un gran error. Ese camino está fracasado, es un remedio que no ha dado resultados” (Revista Anales, 2017).

Es posible observar que las posturas políticas dentro del escenario tradicional en torno a la etnicidad y la tensión Estado-Sociedad que ésta provoca en La Araucanía se dividen en dos grupos, por un lado, quienes tienen una postura acorde con administrar la tensión con el foco en la seguridad ciudadana y desde ahí administrar las otras aristas del problema y por otro lado quienes proponen poner el foco en el diálogo político, intentando bajar la relevancia de lo judicial en la administración del problema, lo que se condice con el análisis de discurso que ha realizado Muñoz-Navarro (2008).

Richard Caifal, secretario general de ENAMA, señala que “para el electorado mapuche es muy valorada la participación electoral y la inclusión de candidatos mapuches en las elecciones” (R. Caifal, comunicación personal, 26 de diciembre de 2018), lo que también es señalado por Toro y Jaramillo-Brun (2014) y por Contreras y Morales (2017) en sus respectivos estudios acerca del tema.

Los entrevistados ligados a la academia y al estudio del Pueblo Mapuche, coincidieron en considerar que la propuesta de escaños reservados para la representación de los pueblos indígenas en el Congreso era una buena estrategia para iniciar el camino hacia una representación “adecuada”. No obstante, el estudio realizado por el CEP (2016) y revisado con anterioridad concluye que la población tanto mapuche como no mapuche se encuentra de acuerdo con la propuesta de escaños reservados en general.

### 3.1.1 Mediación de los partidos políticos entre el Estado y la Sociedad en La Araucanía

Los partidos políticos están muy presentes en el quehacer público de la región de La Araucanía, donde 55.507 de sus habitantes militaban en algún partido político el 2017, equivalente a un 4,54% de los militantes a nivel nacional y al 6,54% de los ciudadanos de la región, según el Serval, en un país donde el porcentaje total de militantes no alcanza al 10% de la población. Los partidos tradicionales destacan atrayendo a la mayor cantidad de militantes en La Araucanía, entre ellos se encuentra el Partido Renovación Nacional (RN), El Partido Unión Demócrata Independiente (UDI) -ambos de derecha-, el Partido Democracia Cristiana (PDC) y el Partido por la Democracia (PPD), ambos de centroizquierda.

En las últimas elecciones de Consejeros Regionales, Diputados, Senadores y Presidenciales realizadas el año 2017, los pactos y sub-pactos conformados por la coalición de derecha “Chile Vamos” lograron vencer a sus pares de izquierda y centroizquierda, agrupados en la coalición “Nueva Mayoría”, en todas las elecciones, de acuerdo con los resultados arrojados por el Serval. En el caso de los consejeros regionales, Chile Vamos obtuvo 11 candidatos electos versus 9 de la Nueva Mayoría, en la elección de diputados resultaron electos 6 candidatos de Chile Vamos frente a 4 de la Nueva Mayoría, Chile Vamos obtuvo 3 senadores en La Araucanía, mientras que la Nueva Mayoría obtuvo 2 candidatos a Senador electos. En el caso de las presidenciales, Sebastián Piñera (candidato de Chile Vamos) derrotó ampliamente en primera y segunda vuelta a Alejandro Guillier (candidato de la Nueva Mayoría), con un 41,53% versus un 20,88% y un 62,4% versus un 37,6% de los votos, respectivamente.

La Senadora Carmen Gloria Aravena ha dicho que La Araucanía es un ejemplo de todo lo que no hay que hacer en cuanto a política y políticas públicas y continúa diciendo que: “Tenemos la segunda mayor inversión pública en los últimos 10 años en el país y los peores indicadores. [...] En lo político hay una gran responsabilidad y quiero ser muy seria en esto, aquí los senadores y diputados tenemos que caminar hacia una desvinculación y autonomía de cuotas de poder paralelas al gobierno, en todos los gobiernos, han existido instituciones que han tenido marcas de partidos políticos, marcas de senadores o diputados y eso le hace muy mal a la institucionalidad, eso debe ser absolutamente erradicado” (Primera Nota, 30 de julio de 2018). Mientras que Natalia Caniguan, directora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera, sostuvo en la entrevista personal (del 04 de enero de 2019) que muchas veces las municipalidades funcionan como *brokers* para los parlamentarios, lo que se condice con lo expresado por la Senadora.

El caso de Wallmapuwen, cuya trayectoria fue revisada con anterioridad, encuentra algunas causas de su fracaso tanto en el arraigo de los partidos tradicionales en la política regional, como en su discurso, en este sentido Richard Caifal sostiene que el discurso “mapuchista” no es electoral y no logra adhesión electoral en los mapuches ni siquiera en las comunidades, debido a que carece de un sentido aglutinador de fuerzas, lo mismo explica el Senador Francisco Huenchumilla a propósito de su posicionamiento político, ya que plantea que para lograr éxito electoral y poder entrar a las esferas de toma de decisiones, las propuestas deben ser amplias e incluyentes (Pairican, 2017).

De esta forma, la observación de los entrevistados coincide con lo planteado por Dahl (1963) y Wolfinger (1965) donde ambos apuntan a que la identificación étnica de los candidatos y electores no es tan relevante, si en la elección específica no se le ha dado importancia a la temática étnica y que la relevancia que esta tenga viene dada por factores externos como la movilidad social del grupo, las que en el caso de La Araucanía generalmente están basadas en promesas de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas. Es así como el estudio del CEP (2016) es categórico al señalar que tanto mapuches como no mapuches consideraban que la restitución de tierras era la mejor forma en la que el Estado podía compensar a los mapuches, mientras que las demandas de reconocimiento constitucional quedaban muy por debajo en la tabla de preferencias, además de que señalaron preferir mayor integración de las comunidades en el quehacer estatal versus las demandas de autonomía.

### 3.1.2 Factores que inciden en el comportamiento electoral en La Araucanía

Al analizar las entrevistas personales realizadas y la bibliografía concerniente al tema, se observa que en las dinámicas sociales de la región de La Araucanía las condiciones socioeconómicas de rezago y pobreza son claves para abrir espacio a estrategias de intermediación política informales, como el clientelismo y el patronazgo presentes en la región.

En el Esquema N°1: Factores que inciden en el comportamiento electoral en La Araucanía, se encuentran 5 factores con sus respectivos componentes, estos son: Estrategia de etnicidad, participación electoral, conservadurismo, clientelismo y pobreza. Dentro de la estrategia de etnicidad, se puede encontrar el posicionamiento de las demandas del pueblo mapuche, como algo que resulta de mayor relevancia para ciertas partes de ese electorado, por otra parte, otras formas de administrar esta tensión y de generar una estrategia en torno a la etnicidad están ligadas a las políticas de asimilación que se han implementado y al racismo, que Herrea y Soto (2016) señalan como el principal obstáculo para el éxito electoral de los candidatos mapuches. Otro factor es la participación electoral que actualmente se ha transformado en un desafío para el sistema político en todo el país. El tercer factor, conservadurismo, está marcado por el éxito de las tendencias derechistas en la región y de alguna forma esto también lo explica y a la vez se relaciona con el caciquismo y el patronazgo que surgen desde el cuarto factor, el clientelismo, que Barozet (2004) y Valenzuela (2016) han indicado que se encuentra históricamente en los procesos políticos chilenos y que también se relaciona con el paternalismo en la forma de abordar e implementar políticas públicas en la región. Por último, el factor de la pobreza y el rezago en el que se encuentra La Araucanía es destacado por los especialistas como uno de los factores más relevantes en el comportamiento electoral y político de la región, junto al clientelismo.

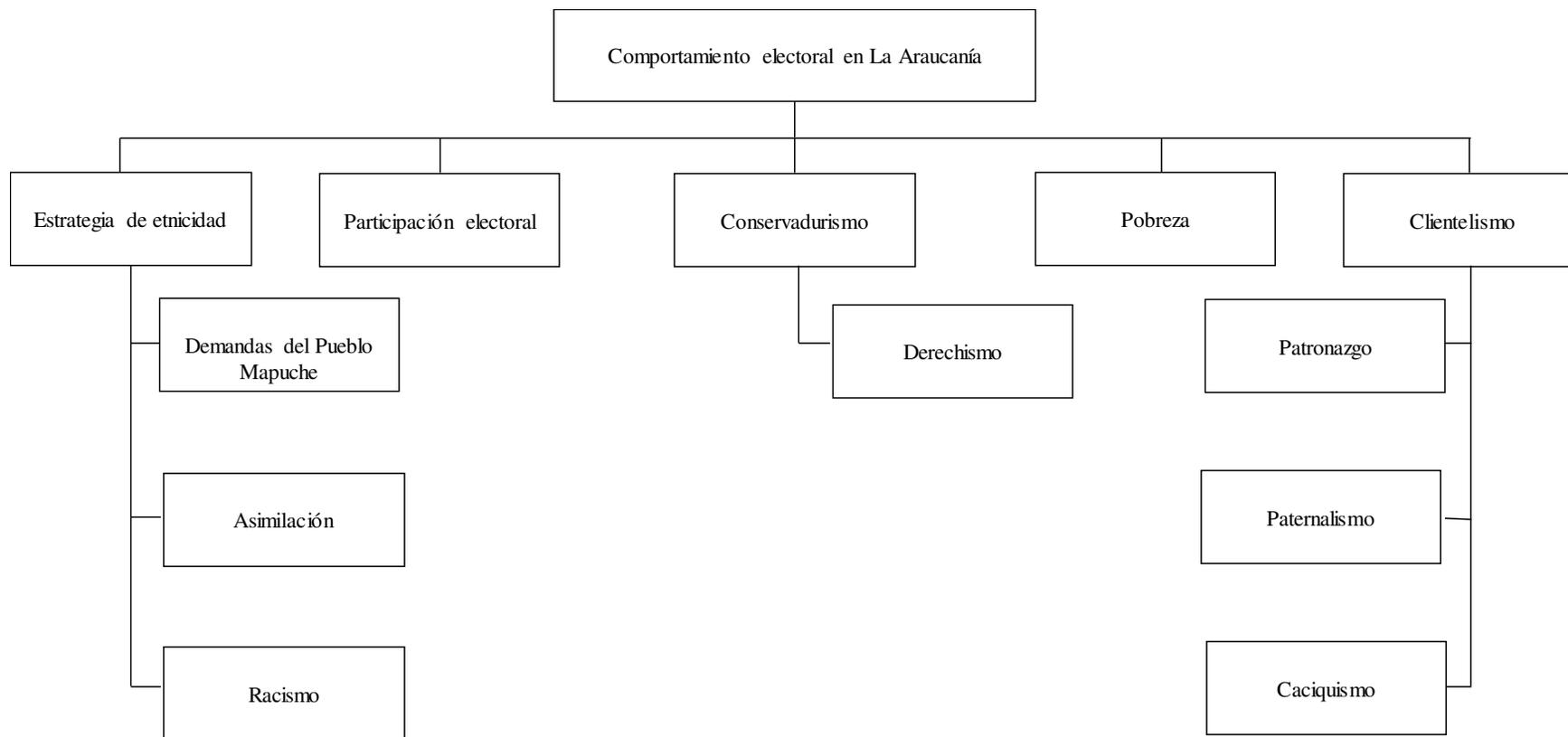
Las condiciones de pobreza y rezago han sido señaladas tanto en las entrevistas, como por las estadísticas oficiales de Chile, además de académicos como Gissi (2004), Oyarzun y Miranda (2011) y Henríquez (2013), este último señala que la marginación, la discriminación y la exclusión social presente en La Araucanía rural genera falta de cohesión social, lo que finalmente se relaciona con la incidencia del clientelismo en la región.

En lo concerniente al conservadurismo, este es señalado por estudios como el de Toro y Jaramillo-Brun (2014) y el de Luna, Toro, Salas y Jaramillo-Brun (2012), algunas encuestas aplicadas en la región como el Latinobarómetro (2012) y las apreciaciones arrojadas por los entrevistadores, lo propuesto por Vergara y Foerster (2002) en cuanto a que el voto mapuche rural era preferente hacia la derecha durante el siglo XX, no encuentra un sustento teórico que lo apoye, debido a que los mismos estudios señalados con anterioridad concluyen que los mapuches rurales de La Araucanía se posicionan políticamente más a la izquierda que sus pares no mapuches y más a la derecha que los mapuches urbanos, por lo que el voto por la derecha no podría atribuirse directamente al voto mapuche en la región.

Los entrevistados hacen hincapié en lo señalado por Durston (2012), donde propone al clientelismo como la base de la construcción de vínculos sociales en La Araucanía. Además, es posible observar que, en un contexto socioeconómico de rezago y pobreza, el clientelismo aparece como la estrategia más inmediata para la administración de los problemas, es así como Richard Caifal indicó que “[el clientelismo] ya es parte de la política tradicional, el cómo se llega a ese electorado (el mapuche), sigue siendo provechoso llegar con sándwiches, llegar con estos regalitos, digamos. El famoso acarreo también, que es básicamente llevar a los electores a los centros de votación. [...] Es gravitante (para la elección), al final del día el que tiene los recursos es el que va a ganar [...] En este sentido, una campaña a diputado no puede bajar de 100 millones (de pesos chilenos, equivalente a 127,000 euros)” (R. Caifal, comunicación personal, 26 de diciembre de 2018).

Asimismo, Natalia Caniguan establece que “el voto está muy manejado por quienes tienen el poder económico. [...] La verdad es que aquí la estrategia que realmente funciona es la del clientelismo”, y al igual que Durston (2012) entiende al clientelismo como un homogeneizador del voto, dada su transversalidad. El caciquismo también resulta una práctica transversal en la política regional, ya que es aplicada por todos los sectores políticos y termina siendo aglutinador (N. Canguan, comunicación personal, 04 de enero de 2019). Por otra parte, Maite de Cea (comunicación personal, 08 de enero de 2019) y Natalia Caniguan coinciden en su diagnóstico en relación con la lectura que hace la derecha en torno al contexto de pobreza en La Araucanía y como se desenvuelve en él alrededor de la caridad, con un desplante pragmático para la administración de la pobreza, lo que genera mayor conexión con el electorado.

Esquema N°2: Factores que inciden en el comportamiento electoral en La Araucanía



Fuente: Elaboración propia en base a resultados de análisis en programa Atlas.ti, 2019

Otros asuntos que se desprenden de las entrevistas radican en la profesionalización que existe en las campañas políticas principalmente en la derecha, donde Maite de Cea destacó la construcción de filiación política a través de estrategias clientelares tanto en época de campañas como fuera de campaña, y resaltó los mecanismos aplicados que lograron hacer las campañas más eficientes.

Por otra parte, Loza (2012) establece una serie de características propias del conservadurismo en la formación de las identidades nacionales en América Latina, entre ellas destaca la etnificación de la historia, la homogenización de rasgos culturales, la influencia de la iglesia, con valores que ella define como que “no contribuyen a la madurez del ser humano” (p. 9), el personalismo, las normas patriarcales y el clientelismo. El caso de la Región de La Araucanía a través de su comportamiento político y electoral logra graficar lo expuesto por Loza (2012). Asimismo, Natalia Caniguan sostuvo que “la población indígena rural es conservadora, por lo que les hace eco esta noción de orden de la derecha, a lo que se ha vinculado mucho el rol conservador de la iglesia evangélica”.

En lo concerniente a la pobreza, diversos estudios en Latinoamérica la han vinculado con el establecimiento de redes clientelares, principalmente en la administración de políticas públicas tendientes a generar subsidios y apoyo social para la superación de la pobreza (Hernández, 2006; Gruenberg y Pereyra, 2009; Lodola, 2005). Según se puede observar en el cuadro N°3, la Región de La Araucanía presenta el mayor porcentaje de personas en situación de pobreza en Chile, y es una situación sostenida en el tiempo, por ende, presenta condiciones base para establecer dinámicas clientelares en el sentido en que Durston (2012) ha descrito para la región.

## Conclusión

La Región de La Araucanía, en Chile, se configura como un caso de estudio satisfactorio para probar el modelo propuesto, en el que la etnicidad como tensión en la relación Estado-Sociedad, es administrada a través de estrategias formales e informales de intermediación por los actores políticos, especialmente por los partidos políticos para fines electorales, lo que genera dinámicas de asistencialismo y clientelismo en la región.

La estrategia de etnicidad que persigue el Pueblo Mapuche en La Araucanía está muy relacionada con lo señalado por Mörner (2019) cuando rescata el concepto de “cierre social” propuesto por Weber y el aporte de Parkin de “cierre de usurpación” donde los excluidos persiguen la obtención de los beneficios históricamente negados.

En tanto, en la intelectualidad mapuche actualmente existe un discurso acerca de la autonomía que está en concordancia con lo sostenido por Yashar (2005), Aylwin, Meza-Lopehandia y Yañez (2013) y por la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. No obstante, este discurso no ha logrado permear en las bases de la población mapuche, que en condiciones socioeconómicas de rezago presenta comportamientos políticos y electorales similares a los de la población no mapuche de la región en las mismas condiciones socioeconómicas, es decir, guiadas por la urgencia de salir de la pobreza y el caciquismo y clientelismo que emplean los partidos políticos tradicionales, en un contexto donde tampoco han permeado otros conceptos como la consciencia de clase o la formación política más dura entre los dirigentes. Por ende, el discurso que levantó Wallmapuwen difícilmente podía tener cabida dentro del electorado.

Según lo que han propuesto Batle y Puyana (2011), Marti I Puig (2008), Caramani (2004) y Clagget *et al.*, (1984) es posible concluir que en Chile existe una baja permeabilidad del sistema de partidos y una alta penetración territorial de los partidos nacionales, algo que también señala Morales (2014) en términos de volatilidad electoral e identificación con los partidos políticos. En el caso de La Araucanía, parece ser que la estrategia de penetración está basada principalmente en el clientelismo.

Por otra parte, la construcción social de la ciudadanía en Chile y, por consiguiente, en La Araucanía sigue las propuestas de mestizaje de Mörner (2019) aunque con la singularidad que se ha postulado tanto desde el Estado, como desde la academia de un alto grado de homogeneidad étnica y de asimilación entre toda la población, lo que ha conllevado a que los esfuerzos por redefinir la ciudadanía se entiendan más como procesos de democratización que de políticas étnicas, como propone Yashar (2005).

En concordancia con lo evidenciado por la literatura, es posible observar que el comportamiento electoral de La Araucanía se basa en vínculos de intermediación no programáticos, los que se ven mediados por las características socioeconómicas existentes en el contexto regional, como la desigualdad estructural, el rezago y la pobreza. Es así como los

5 principales factores que inciden en el comportamiento político y electoral de La Araucanía y que fueron observados en este estudio son: la estrategia de etnicidad, la participación electoral, el conservadurismo, el clientelismo y la pobreza. Es así como lo propuesto por Strokes (2011) acerca del clientelismo se cumple para la región de La Araucanía.

Los desafíos que propone este análisis radican en que los factores de incidencia en el comportamiento electoral y político de la Región de La Araucanía que fueron hallados en este análisis interactúan entre ellos y resulta difícil medir cuáles son los alcances que tiene cada uno.

Por otra parte, resulta interesante explorar si el clientelismo político genera los efectos que señala Rehren (2000) en cuanto a maximizar la influencia y control de los partidos políticos sobre su clientela, en La Araucanía. Debido al dinamismo y la capacidad adaptativa del clientelismo, este podría eventualmente configurarse como una estrategia de fidelización de los votantes en épocas de baja identificación ideológica y de ofertas de proyectos políticos que no son altamente variadas.

## Bibliografía

- Alvarez-Rubio, P. (2005). Heterogeneidad e identidad nacional en el imaginario cultural chileno: una actualización. *Revista de crítica literaria latinoamericana*, 31(62), 19-26.
- Aravena, C. (30 de julio de 2018). Entrevista a Senadora Carmen Gloria Aravena. *Diario Digital Primera Nota*. Recuperado en <http://www.primeranota.cl/web/entrevistas/senadora-carmen-gloria-aravena-creo-que-cuando-en-un-pais-se-generan-privilegios-para-algunos-es-cuando-se-inician-todos-los-conflictos/>
- Arriagada, E. (2013). Clientelismo político y participación local. El rol de los dirigentes sociales en la articulación entre autoridades y ciudadanos en Santiago de Chile. *Revista Latinoamericana Polis*, 12(36), 15-38.
- Auyero, J. (2001). *La política de los pobres: las prácticas clientelistas del peronismo*. Buenos Aires: Manantial
- Aylwin, J., Meza-Lopehandia, M. y Yáñez, N. (2013). *Los pueblos indígenas y el derecho*. LOM Ediciones.
- Barozet, E. (2004). Elementos explicativos de la votación de los sectores populares en Iquique: lógica y eficiencia de las redes clientelares. *Revista Política*, (43). 205-250.
- Battle, M. y Puyana, J. (2011). El nivel de nacionalización del sistema de partidos colombiano: una mirada a partir de las elecciones legislativas de 2010. *Colombia Internacional* 74(2), 27-57.
- Baud, M., Koonings, K., Oostindie, G., Ouweneel, A. y Silva, P. (1996). *Etnicidad como estrategia en América Latina y el Caribe*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Bauer, A. (1994). *La sociedad rural chilena: Desde la conquista española a nuestros días*. Santiago: Editorial Andrés Bello.
- Bengoa, J. (1985). *Historia del pueblo mapuche: Siglos XIX y XX*. Santiago: Ediciones LOM.
- Canel, M. J. (1999). Comunicación política. *Técnicas y estrategias para la sociedad de la información*. Madrid: Tecnos.
- Calvo, E. y Murillo, V. (2012). When parties meet voters: Assessing political linkages through partisan networks and distributive expectations in Argentina and Chile. *Comparative Political Studies* 20, 1-32
- Caramani, D. (2004). *The nationalization of politics. The formation of national electorates and party systems in western Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cayuqueo, P. (2016). *Fuerte Temuco y otras crónicas mapuche*. Santiago: Editorial Catalonia.

- Chhibber, P y Kollman, K. (2004). *The formation of national party systems*. Princeton: Princeton University.
- Centro de Estudios Públicos (2016). *Los mapuches rurales y urbanos hoy. Marzo-Mayo 2016*. CEP-Chile
- Clagget, W., Flanigan, W. y Zingale, N. (1984). Nationalization of the American electorate. *American Political Science Review* 78 (1): 77-91.
- Contreras, G. y Morales, M. (2017). Ethnic solidarity and the vote: Mapuche candidates and voters in Chile. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 44(11), 1954-1975.
- Dahl, R. (1963). *Who governs?* Yale University Press. New Haven.
- De Cea, M. y Fuentes S. (2016) Vendiendo soluciones. Campañas tradicionales y profesionalizadas en Chile. *Revista Internacional de Sociología* 74(3), 1-12.
- Delamaza, G. (2012). Actores sociales regionales: Fortalezas y debilidades para impulsar la descentralización. En Delamaza, G., Cunill, N. y Joignant, A. (2012). *Nueva agenda de descentralización en Chile. Sentando más actores a la mesa*. Santiago: Ril Editores, 241-278.
- Dodds, T. (2017). Efecto del postmaterialismo y nivel socioeconómico en el comportamiento de voto chileno. *Ciencia Política*, 12(24), 205- 235.
- Donoso, J. (2013). Violencia política en Chile entre el pueblo mapuche y el gobierno del presidente Ricardo Lagos. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 8(2).
- Durston, J., Duhart, D., Miranda, F. y Monzó, E. (2015). *Comunidades campesinas, agencias públicas y clientelismos políticos en Chile*. Santiago: LOM ediciones.
- Durston, J. (2012). Clientelismo político y actores populares en tres regiones de Chile. En Delamaza, G., Cunill, N. y Joignant, A. (2012). *Nueva agenda de descentralización en Chile. Sentando más actores a la mesa*. Santiago: Ril Editores, 369-391.
- Engelman, J.M. (2017). Clientelismo y etnicidad: El proceso de formación del “Consejo Indígena de Almirante Brown” en provincia de Buenos Aires, Argentina. *Revista Antropologías del Sur* 7, 39-54.
- Farrell, D. y Schmitt-Beck, R. (2003). *Do political campaigns matter?: campaign effects in elections and referendums*. Routledge.
- Foerster, R. (1999). ¿Movimiento étnico o movimiento etnonacional mapuche?. *Revista de Crítica Cultural* 18, 52-58.
- Foerster, R. y Montecinos, S. (1989). *Organizaciones, líderes y contiendas mapuches, 1900-1970*. Santiago: Editorial Cem.
- Fuentes, C., De Cea, M. y Teitelboim, B. (2019). Por quién y cuánto votan los indígenas. *Revista Estudios Políticos* 55.

- Giménez, G. (2006). El debate contemporáneo en torno al concepto de etnicidad. *Cultura y representaciones sociales*, 1(1), 129-144.
- Gissi, N. (2004). Segregación espacial mapuche en la ciudad: ¿negación o revitalización identitaria?. *Revista de Urbanismo* 9.
- Gruenberg, C. y Pereyra, V. (2009). El clientelismo en la gestión de programas sociales contra la pobreza. *Documento políticas públicas y análisis*, 60.
- Gutiérrez Chong, N. y Gálvez, D. (2017). La cultura política en el pueblo mapuche: el caso Wallmapuwen. *Revista mexicana de ciencias políticas y sociales*, 62(231), 137-165.
- Hernández, E. (2006). El clientelismo en México: los usos políticos de la pobreza. *Espacios públicos* 9(17), 118-140.
- Herrea, M., y Soto, I. (2016). Trayectorias y carreras políticas de los candidatos mapuche. Elecciones legislativas, municipales y de Consejeros Regionales 1990-2013.
- Henríquez, L. (2013). Cinco décadas de transformaciones en La Araucanía rural. *Revista Latinoamericana Polis* 12(34), 1-17.
- Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual review of political science* 14(1), 289-310.
- Huchim, E. (2012). Navegar en el desencanto: Democracia, caciquismo, corrupción y rendición de cuentas. En Echeverría, M., Reyes, R. y Sabido, A. (2012). *La transición agotada: Reflexiones y perspectivas para una democracia efectiva*. Instituto Nacional de Investigación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno. Ciudad de México.
- Instituto Nacional de Estadísticas (2018). *Síntesis de resultados Censo 2017*. Santiago.
- Isla, P. (2012). Orden y patria es nuestro lema: construcción de alteridad en la gramática del legalismo y del enemigo interno en Chile. (Doctoral dissertation, Institute for History, Latijns-Amerika studies, Faculty of the Humanities, Leiden University).
- Jones, M. y Mainwaring, S. (2003). The nationalization of parties and party systems: An empirical measure. *Party Politics* 9(2), 139-166.
- Kay, C. (1980). Transformaciones de las relaciones de dominación y dependencia entre terratenientes y campesinos en Chile. *Revista Mexicana de Sociología* 42(2), 751-797.
- Larraín, J. (2010). Identidad chilena y el bicentenario. *Estudios Públicos*, 120, 5-30.
- Larraín, J. (2001). *Identidad chilena*. Santiago: LOM ediciones.
- Larreguy, H., Marshall, J. y Querubín, P. (2016). Parties, brokers and voter mobilization: how turnout buying depends upon the party's capacity to monitor brokers. *American political science review* 110(1), 160-179.
- Lodola, G. (2005). Protesta popular y redes clientelares en la Argentina: El reparto federal del Plan Trabajar. *Desarrollo económico*, 44(176), 515-536.

- López, M. (2004). Conducta electoral y estratos económicos: el voto de los sectores populares en Chile. *Política*, No. 43, 285-298.
- López, M. & Morales, M. (2005). La capacidad explicativa de los determinantes familiares en las preferencias electorales de los chilenos. *Política. Revista de Ciencia Política*, 45, 87-108.
- Loza, M. (2012). El conservadurismo en la formación de la identidad nacional latinoamericana. *Contextualizaciones latinoamericanas* 4(6), 1-10.
- Luna, J.P. (2014). *Segmented representation. Political party strategies in unequal democracies*. New York: Oxford University Press.
- Luna, J.P., Toro, S., Salas, V. y Jaramillo-Brun, N. (2012). Cultura política de la democracia en Chile y en las Américas, 2012: hacia la igualdad de oportunidades. *Informe del Barómetro de las Américas, LAPOP*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco.
- Madrid, R. (2005). Indigenous voters and party system fragmentation in Latin America. *Electoral Studies* 24(4), 689-707.
- Marimán, J. (2012). *Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI*. Santiago: LOM Ediciones.
- Marimán, J. (1994). Transición democrática en Chile ¿Nuevo ciclo reivindicativo mapuche?. *Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien*, 63(1), 91-118.
- Martí I Puig, S. (2008). Las razones de presencia y éxito de los partidos étnicos en América Latina: Los casos de Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú (1990-2005). *Revista mexicana de sociología*, 70(4), 675-724.
- Miller, A. (1971). Ethnicity and political behavior: A review of theories and an attempt at reformulation. *Political Research Quarterly*, 24(3), 483-500.
- Morales, M. (2016). Tipos de identificación partidaria. América Latina en perspectiva comparada, 2004-2012. *Revista de Estudios Sociales/Journal of Social Studies*, (57), 25-42.
- Morales, M. (2014). Congruencia programática entre partidos y votantes en Chile. *Perfiles latinoamericanos*, 22(44), 59-90.
- Morales, M. y González, J. (2011). Tendencias electorales de los grupos indígenas en Chile. *EURE (Santiago)*, 37(110), 133-157.
- Mörner, M. (2019). Algunas reflexiones en torno a etnicidad y movilidad social en la historia. *Revista Historia*, (22), 214-232
- Muñoz-Navarro, A. (2008). La nación en el discurso de la derecha. Un análisis ideológico del debate parlamentario chileno. *Signo y Pensamiento*, 27(53).
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2012). Perfil de programa para la atención integral de familias de comunidades indígenas con predios

adquiridos. Programa de fortalecimiento de las capacidades nacionales para la prevención y gestión de conflictos interculturales en Chile.

Órdenes, M. y Díaz-Diego, J. (2018). Cuando la mano de obra se subleva: estrategias terratenientes durante la reforma agraria chilena (1964-1973). *Historia Agraria*, 74, 201-230.

Oyarzun, E. y Miranda, B. (2011). La economía rural en Chile: Entre la pobreza y el desarrollo. *Estudios de Economía Aplicada* 29(1), 31-56.

Pairican, F. (2017). Entrevista a Francisco Huenchumilla. *Revista Anales* 7(13), 153-163.

Rehren, A. (2000). Clientelismo político, corrupción y reforma del Estado en Chile. *Libros Reforma de Estado*, 2.

Remmer, K. (1984). *Party Competition in Argentina and Chile. Political Recruitment and Public Policy, 1890-1930*. Lincoln and London: University of Nebraska Press.

Saavedra, A. (2002). *Los mapuche en la sociedad chilena actual*. Santiago: LOM Ediciones.

Sáez-Arance, A. (2015). Araucanos or 'Mapuches'?. En *University of Cologne Forum» Ethnicity as a Political Resource* «(ed.) *Ethnicity as a Political Resource. Conceptualizations across Disciplines, Regions, and Periods*, 221-236.

Salazar, G. (2001). Capital social y memoria histórica. En CEPAL, *Capital social y políticas públicas en Chile: Investigaciones recientes*. Santiago: CEPAL.

Salman, A. J. (2002). Modelos políticos y organización barrial: Chile y Ecuador. *Proposiciones- SUR*, 34, 219-232.

Sartori, G. (1976). *Parties and party system: a framework for analysis*. New York: Cambridge University Press

Schattschneider, E. (1960). *The semi-sovereign people: A realist's view of democracy in America*. New Yoirk: Holt, Rinehart & Winston.

Scherlis, G. (2016). La regulación de los partidos latinoamericanos y su integración territorial. *Revista Derecho Electoral* 21, 144-192.

Serbín, A. (1980). Etnicidad y política. Los movimientos indígenas en América Latina. *Revista Nueva Sociedad* 49, 57-71.

Soto, F. y Franco, C. (5 de octubre de 2018). La Araucanía: cómo era la tierra donde ganó el "Sí" en el plebiscito. *La Tercera*. Recuperado en <https://www.latercera.com/especial-digital/noticia/la-araucania-como-era-la-tierra-donde-gano-el-si-en-el-plebiscito/343479/>

Stokes, S. (2011). Political clientelism. *The Oxford handbook of political science*. Oxford University Press.

Stokes, D. (1965). A variance components model of political effects. En *Mathematical applications in political science*, ed. John M. Claunch. Arnold Foundation: Dallas.

- Szwarcberg, M. (2013). The microfoundations of political clientelism: Lessons from the Argentinian case. *Latin American Research Review* 48(2), 32-54.
- Tironi, E. (1989). ¿Pobreza= frustración= violencia? Crítica empírica a un mito recurrente. *University of Notre Dame, Working Paper*, 123.
- Toro, S. y Jaramillo-Brun, N. (2014). Despejando mitos sobre el voto indígena en Chile: Preferencias ideológicas y adhesión étnica en el electorado Mapuche. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 34(3), 583-604.
- Toro, S. y Valenzuela, M. (2018). Chile 2017: ambiciones, estrategias y expectativas en el estreno de las nuevas reglas electorales. *Revista de Ciencia Política*, 38(2), 207-232.
- Trent, J. y Friedenber, R. (2008). *Political campaign communication. Principles and practices*. Plymouth: Rowman & Littlefield publishers, INC.
- Universidad de La Frontera. (2011). Estudio evaluación socioproductiva de las tierras adquiridas con el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de CONADI.
- Urban, G., y Sherzer, J. (1991). *Nation-states and Indians in Latin America*. Texas: Hats off books.
- Valdés, M. y González, J. (2006). El comportamiento político mapuche. [http://www.mapunet.org/documentos/mapuches/compor\\_politico\\_expan\\_VF.pdf](http://www.mapunet.org/documentos/mapuches/compor_politico_expan_VF.pdf)
- Valenzuela, A. (2016). *Intermediarios políticos en Chile. Gobierno local en un régimen centralizado*. Santiago: Ediciones UDP.
- Vergara, J. I., & Foerster, R. (2002). Permanencia y transformación del conflicto Estado-mapuches en Chile. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, (6), 35-46.
- Wolf, E. (1966). Kinship, friendship and patron-client relationships in complex societies. En M. Baton (Comps.), *The Social Anthropology of Complex Societies*. London: Tavistock Publications.
- Wallmapuwen. (Diciembre, 2005). Declaración de Wallmapuwen. Kiñewtuliypiñ newentuy taiñ Wallmapu. *Azkintuwe*. N° 17, año 3, 9-10.
- Wolfinger, R. (1965). The development and persistence of ethnic voting. *American Political Science Review*, 59(4), 896-908.
- Yashar, D. (2005). *Contesting citizenship in Latin America: the rise of indigenous movements and the postliberal challenge*. New York: Cambridge University Press.
- Zarembek, G., Guarneros-Meza, V., & Lavalle, A. G. (Eds.). (2017). *Intermediation and Representation in Latin America: Actors and Roles Beyond Elections*.

Este trabajo ha sido financiado por CONICYT PFCHA/ Máster Becas Chile/2018 - 73190390